

Chile: crisis orgánica y razón ciudadana*

Roberto Pizarro

Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XVIII, Número 47, Enero - Abril de 2013

El artículo hace una revisión de los malestares y desesperanzas que la ciudadanía chilena padece debido al modelo económico y al régimen político, que está generando desigualdades y desarrolla graves problemas ambientales por la excesiva explotación de recursos naturales, con estrategias de desarrollo que acentúan las desigualdades sociales y generan abusos en el mundo del trabajo promovidos por las Políticas Estatales que favorecen a los empresarios.

Además analiza los problemas de la educación, el sistema de salud y las desigualdades regionales, como anomalías ocasionadas por el sistema económico impuesto para favorecer a los más ricos. El artículo finaliza con la propuesta de cambiar las instituciones empezando por la Constitución del 80, con apoyo de la sociedad civil.

Palabras clave: Crisis, desigualdad, sociedad civil, Chile

Chile: organic crisis and public reason

The article makes a revision of the uneasiness and despair that Chilean citizenship suffers due to the economic model and the political regime, which is generating inequalities and develops serious environmental problems by the excessive exploitation of natural resources, with development strategies that emphasize social inequalities and generate abuses in the world of work generated by State policies that favor employers.

Also discusses the problems of education, the health system and regional inequalities, as anomalies caused by the imposed economic system to favor the rich. The article concludes with the proposal to change the institutions. Beginning with the 80's Constitution, with the support of civil society.

Key words: Crisis, inequality, civil society, Chile

* Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y ministro de Planificación. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

1. Malestar y desesperanza

Un inmenso malestar recorre Chile. La ciudadanía, en sus diversas expresiones, protesta por los abusos y desigualdades que cotidianamente los golpean. El estado de cosas existente es rechazado. Ha aumentado el convencimiento que el modelo económico concentra en unas pocas familias ricas los beneficios del crecimiento que ha experimentado el país, mientras el centralismo de Santiago impide el desarrollo económico y político de las regiones. Por otra parte, a la gran mayoría nacional ya no le resulta convincente la política social, de carácter asistencialista, que entrega bonos a los más pobres y coloca en la incertidumbre a las capas medias. Finalmente, los jóvenes se rebelan frente a un régimen político que cierra el acceso a su participación en los asuntos del país.

El descontento se generaliza. Las demandas ciudadanas, soterradas durante los veinte años de gobiernos de la Concertación, se han expresado en plenitud a lo largo del gobierno de Piñera, muy especialmente a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Pero él no parece ser el enemigo principal. Sólo se le identifica como el símbolo de las desigualdades y abusos. Representa a esas personas y familias que se han enriquecido a costa de la mayoría de los chilenos. La ciudadanía se

ha dado cuenta que sus problemas cotidianos trascienden a la autoridad de turno. Encuentran su raíz en un sistema económico-social injusto y en un orden político excluyente. Ello explica la descalificación que hace la opinión pública de toda la clase política: el gobierno, la derecha, la oposición y el Parlamento¹.

La crítica se ha extendido a los gobiernos anteriores porque la Concertación no cumplió con sus ofertas a la ciudadanía. En efecto, durante su mandato de veinte años, en vez de utilizar las posiciones de poder alcanzadas en el gobierno y el Parlamento para modificar el modelo económico neoliberal, lo legitimó. Con ello facilitó la acumulación de riquezas para una minoría, permitiendo al mismo tiempo que las desigualdades y abusos se convirtieran en rasgos distintivos de la sociedad chilena. El modelo de injusticias y exclusiones lo instaló Pinochet, con los economistas de Chicago y la derecha conservadora; pero, es inocultable que ha sido aceptado y consolidado por los dirigentes de la Concertación y sus economistas. Eso lo percibe hoy día la ciudadanía, la que conservó su paciencia durante largos años a la espera que sus demandas fuesen acogidas por los gobier-

¹ Así lo indican dramáticamente las encuestas de opinión pública más calificadas, como las del CEP y ADIMARK.

nos de «centro-izquierda».

Por otra parte, en el plano social se ha sostenido que los largos años de crecimiento económico y las políticas sociales asistenciales permitieron disminuir la pobreza. Ello es cierto. Pero esos indicadores no dan cuenta de la pobreza relativa; vale decir, las desigualdades que afectan cotidianamente a la familia chilena, dando origen a protestas que se generalizan. El dolor de las diferencias se hace cada vez más fuerte en una sociedad en que los medios de comunicación, las colocan al desnudo, desde la mañana a la noche.

Por último, el régimen político se ha convertido en una muralla infranqueable para que los jóvenes descontentos, puedan canalizar sus demandas, en el marco de las instituciones vigentes. No ha existido voluntad ni valentía para modificar el régimen político heredado de la dictadura. La propia Constitución, instalada bajo el régimen de Pinochet, rige a la sociedad chilena. Algunas reformas constitucionales realizadas bajo el gobierno de Lagos conservan varias restricciones, la mayor de ellas es el régimen electoral binominal. La falta de una disposición efectiva a modificarlo, se explica principalmente porque el binominal ayuda a los políticos tradicionales a perpetuarse en el poder, impidiendo así el acceso de nuevas fuerzas al sistema político.

Hoy día, hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, se dan cuenta que la incapacidad del Estado para responder a sus demandas no tiene que ver sólo con errores de las políticas públicas. La con-

ciencia ha crecido suficientemente para comprender que se vive una crisis orgánica en el país, en el sentido gramsciano², con una manifiesta pérdida de credibilidad de las instituciones.

Es el modelo económico el que cierra las puertas a una distribución equitativa de la riqueza. Es la concepción social de la focalización la que estigmatiza a los más pobres, excluye a las capas medias, y abre camino al lucro en actividades del área social. Es la institucionalidad política, consagrada en la Constitución de 1980, la que restringe la participación ciudadana.

El crecimiento inédito experimentado por la economía chilena en las últimas décadas y los beneficios de una agresiva inserción en la economía mundial han dado por resultado una notable acumulación de la riqueza en manos del gran capital nacional y extranjero. Así las cosas, los que mandan reproducen su mandato, y con más fuerza que antes porque ahora su poder económico es mayor, con extensión inédita al ámbito político.

Esa fuerza mayor de los grupos económicos en la sociedad chilena ha conducido a un deterioro ético de la política, cuestión inédita para la realidad cultural de nuestro

² Para Antonio Gramsci el concepto de «crisis orgánica» se refiere a esos momentos históricos en que a la clase dominante se le fracturan las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, y no pueden ejercer su dirección del modo habitual. Ello puede además representarse en la siguiente frase, del mismo Gramsci: «Una verdadera crisis ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer».

país. En efecto, los vasos comunicantes entre la política y los negocios han crecido notablemente en los últimos años. No se trata sólo de los recursos que las grandes empresas entregan para las campañas políticas; es también el reclutamiento que realizan para la participación en directorios de las empresas de ex ministros y ex superintendentes de instituciones reguladoras que de esa forma les sirven de lobistas. La intervención de los grupos económicos en la esfera del Estado y el control que ejercen sobre la clase política se ha hecho evidente en el país.

El malestar ya no puede ser canalizado a través de las instituciones existentes. Todo indica que la protesta va más allá de reivindicaciones parciales. Ello explica que las demandas apunten a construir nuevos caminos económicos, sociales y políticos, que permitan entregar a todos los chilenos iguales oportunidades en la vida. Permite entender el cuestionamiento de los movimientos sociales a la institucionalidad, en educación, salud y previsión que divide a los chilenos entre ricos y pobres, cerrando oportunidades a los más modestos. Por ello se reivindica, al mismo tiempo, una nueva política económica, con un Estado activo capaz de diversificar la matriz productiva y comprometida con los trabajadores y pequeños empresarios. Es la crisis de la institucionalidad actual y el intento de esbozar una nueva.

En suma, el anhelo ciudadano, demanda una nueva estrategia de desarrollo en que sus agentes fundamentales sean los subordinados y excluidos. Ello, al final de

cuentas, exige una nueva Constitución que asegure oportunidades económicas y sociales para todos los chilenos y que termine con las exclusiones políticas.

El asunto no es fácil. La uniformidad de los medios de comunicación reproduce cotidianamente el orden existente, promoviendo el pensamiento que exalta el mercado por sobre el Estado, el individualismo por sobre la entrega a los demás y el consumismo en vez de la austeridad. No es sólo mediante la coerción que se ha impuesto la hegemonía de clase dominante, sino a través de su visión del mundo, su moral e ideología. Han sido cuarenta años de hegemonía que comienzan a resquebrajarse.

En el terreno ideológico y de los medios de comunicación, los gobiernos de la Concertación no quisieron, o no fueron capaces de desafiar esa virtual restricción a la libertad de prensa que imponen el duopolio de las comunicaciones —las cadenas de *El Mercurio* y *La Tercera*— y tampoco desplegaron iniciativas para enfrentar la presencia agobiante de una televisión que achata la cultura con largas horas dedicadas a la farándula y a la exaltación del consumo. A ello hay que agregar el control de escuelas y universidades, que le ha permitido al poder económico no sólo lucrar, sino al mismo tiempo controlar la conciencia de los jóvenes extendiendo la difusión del pensamiento único.

La protesta que se generaliza revela el cansancio de la mayoría de chilenos y chilenas que anhelan una vida mejor para sus familias. Se dan cuenta que el sistema político actual y su liderazgo son incapaces de

absorber las demandas democráticas. La protesta apunta a la construcción de otro sistema político y otro Estado. Se demanda también un nuevo modelo económico que favorezca la distribución democrática de los beneficios del crecimiento, entre las personas y también entre las regiones. Se precisa además un nuevo ordenamiento social, que dé al traste con las políticas asistenciales e instale la universalidad, para garantizar derechos a todos los chilenos.

En suma, se cuestiona la legitimidad del sistema; se rechaza la totalidad del ordenamiento institucional que emergió con la dictadura en 1973 y que se consagró con la Constitución de 1980. De acuerdo con lo que señalan Salazar y Pinto, y en una referencia más general al liberalismo en América Latina:

El debate sobre la legitimidad no ha surgido del simple juego académico, sino de la irrupción histórica, durante la década de los 80' en el caso de Chile en los 70', RP), de los sistemas neoliberales. De la forma en que fueron construidos los Estados que hoy se regulan por la lógica del Mercado. Como se sabe, esos Estados no se construyeron en base al libre consenso y razonada acción de las masas ciudadanas respectivas, ni por las invisibles manos del Mercado, sino por una intervención fáctica (autoritaria) del Estado, o de grupos militares. Intervención que tenía por fin desmantelar el Estado Social Benefactor. (Salazar y Pinto, 1999).

2. *Crecimiento para algunos*

Desde hace veinte años, el crecimiento ha

sido preocupación principal de políticos y economistas, tanto de derecha como de la Concertación. Hoy se persiste en el mismo discurso. Se escucha al Presidente Piñera y a su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, argumentando que los asuntos del país andan bien porque la economía chilena alcanzará elevadas tasas de crecimiento en los próximos años.

En la ENADE 2010, referencia ineludible de gobiernos, economistas y empresarios, el ministro Larraín destacó que el país se encuentra en un «círculo virtuoso» de crecimiento, creación de empleo y reducida inflación; y, bajo tales condiciones, las perspectivas de alcanzar el desarrollo hacia el año 2018 serían auspiciosas. Crecimiento se considera sinónimo de desarrollo. Algunos días antes, el Presidente Piñera había provocado molestias en la Concertación porque en su viaje a la cumbre de la APEC, en Japón³, criticó el bajo crecimiento de la economía durante los cuatro años de gobierno de Bachelet, destacando que, en cambio, gracias a su gobierno se había recuperado el dinamismo perdido.

Cuando los Chicago Boys, inspirados en los economistas norteamericanos Friedman y Harberger, y encabezados por Sergio de Castro, diseñan el modelo neoliberal, apoyado en la fuerza material del General Pinochet, la preocupación exclusiva por el crecimiento fue muy criticada por los opositores al régimen militar. Sin embargo, a partir del momento que la Concertación se instala en el gobierno no se actúa en

³ Octubre 2010.

consecuencia; no se implementa una estrategia alternativa que trascienda la preocupación por el crecimiento.

Se destaca la equidad en los gobiernos de Aylwin y Frei e, incluso, en el programa de Lagos la consigna es «crecimiento con igualdad». Sin embargo, se trata de referencias retóricas. La concepción y el camino, siguen siendo los mismos. Y hoy día ya es indesmentible que durante los gobiernos de la Concertación si bien se redujo la pobreza⁴, no hubo simultáneamente preocupación, ni medidas de política pública deliberadas, para favorecer una mejor distribución del ingreso, disminuir las desigualdades de acceso en salud, educación y previsión, ni tampoco para generar equilibrios territoriales entre Santiago y las regiones.

La concentración de la riqueza en unos pocos grupos económicos y el disminuido poder de las regiones en comparación a Santiago, ha sido el resultado manifiesto de esas políticas públicas; siendo el sistema impositivo regresivo un instrumento poderoso para favorecer ese estilo de crecimiento, como veremos más adelante.

Antes de 1990, la crítica de los economistas opositores al modelo, instalado por el gobierno militar-civil, cuestionaba «...la creencia ingenua en el libre mercado no regulado» (CIEPLAN, 1983: 15) y la pasividad del Estado en la economía. Además, se criticaba la «...total ausencia de una con-

⁴ El «Consenso de Washington», contempla en su decálogo la atención de la pobreza, con los limitados recursos fiscales que permite una política impositiva restrictiva.

cepción global del desarrollo del país» (CIEPLAN, 1983: 16). Ello es explícito en Alejandro Foxley, presidente del centro de estudios crítico más importante en los años ochenta (CIEPLAN), quien posteriormente sería ministro de Hacienda del Presidente Aylwin.

Foxley cuestionaba la concepción económica neoliberal y planteaba la necesidad de desarrollar una planificación estratégica en que el Estado «...organiza el proceso de movilización de voluntades y de recursos en aquellos sectores donde se desea generar ventajas comparativas» (Foxley, 1987). Muy entusiasmado con el tipo de desarrollo de los países asiáticos, rechazaba la existencia de un estado inmóvil y sin propuestas estratégicas para el desarrollo económico del país.

Foxley, quien sería el Ministro de Hacienda del Presidente Aylwin y los economistas democristianos del CIEPLAN, instalados en posiciones de dirección destacada durante los gobiernos democráticos⁵, cambiarían radicalmente de postura. De la crítica al modelo económico neoliberal, pasaron a asumirlo plenamente. Situación similar sucedería con los economistas del Partido Por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista (PS).

Las razones de esta transmutación parecen ser de dos índoles. Por una parte, algunos se convencieron de las bondades

⁵ Foxley, Cortazar, Marfán, Velasco, Arellano. Es destacada la excepción de Ricardo French-Davis, considerado heterodoxo, siempre fue rechazado para ocupar posiciones de poder tanto Hacienda como en el Banco Central.

de la economía de mercado autorregulada, postura que se generalizó en América Latina en los años noventa y que además fue sugerida vigorosamente por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales⁶. Otros, después de haber ocupado posiciones de poder en los gobiernos de la Concertación, fueron contratados como ejecutivos o miembros de los directorios de grandes empresas nacionales o extranjeras⁷, mientras algunos se convirtieron en lobistas para facilitar los negocios de las grandes empresas siendo al mismo tiempo asesores de los gobiernos de la Concertación⁸.

Alejandro Foxley, quien se encuentra entre los convencidos del modelo, pone de manifiesto su trasmutación ideológica en entrevista a la revista *Cosas*:

Pinochet... realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de incorporarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el

⁶ De aquí viene precisamente la calificación de «Consenso de Washington», acuñada por Williamson, para referirse al neoliberalismo. (Pizarro, 2005).

⁷ Casos destacados son los de Jaime Estévez, Osvaldo Puccio, Ricardo Solarí, René Cortazar, Daniel Fernández, Julio Bustamante, Álvaro García, Jorge Rosenbluth, Eduardo Aninat, Claudio Hohmann, entre otros.

⁸ Activos en esta materia se han mostrado Enrique Correa y Eugenio Tironi.

año 73, con Sergio de Castro a la cabeza. [...] Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile (subrayado RP), que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en un alto lugar (subrayado RP). Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida⁹.

El convencimiento de Foxley, y su valoración de Pinochet, la explica su mentor y amigo, Edgardo Boeninger, quien sería Ministro de la Presidencia de Aylwin; considerado, junto a Enrique Correa, el estratega de la transición negociada con los militares, refiere en su libro *Democracia en Chile* (Boeninger, 1997), el giro copernicano del liderazgo de la Concertación y el importante papel que en ello desempeñaron los economistas, al acercarse ideológicamente a los Chicago Boys. Ese giro ayudó a la transición política pactada sobre la base de la Constitución de 1980:

En este proceso de convergencia económica

⁹ Revista *Cosas*, 5 de mayo de 2000. Citado por Felipe Portales (2005)

tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas demócrata-cristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70 pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales ...La inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista... (Boeninger, 1997: 369)

Boeninger destaca también el impacto que provocó en los economistas opositores el fuerte crecimiento que se produjo en el último quinquenio del gobierno de Pinochet, liderado por su Ministro de Hacienda, Hernán Bucci. ¡Nuevamente la importancia del crecimiento!:

...la fase de crecimiento sostenido a que entró la economía chilena a partir de 1986 contribuyó a la generación de un consenso básico en torno al orden económico futuro. (Boeninger, 1997: 374)

Esta visión de las cosas es consecuencia de la debilidad teórica y política de la dirigencia económico-política de la Concertación frente a la imposición del modelo civil-militar de la derecha. También, de la fuerza avasalladora que han adquirido los grupos económicos nacionales e internacionales, los que domesticaron a los ayer opositores al neoliberalismo, convirtiéndolos en sus incondicionales. En definitiva, la hegemonía dominante impuso su ideo-

logía en los mismos opositores al régimen de Pinochet. Como destaca Hinkelammert:

Al imponerse el capital apoyado en la lógica del mercado mundial, se impusieron teorías que más bien interpretaban esa dominación y que se suele —creo que con razón— sintetizar con el nombre de neoliberalismo. En nombre de la eficiencia y de la competitividad, ellas legitiman el sometimiento bajo la dependencia.» (Boeninger, 1997: 7).

El elevado crecimiento de la economía desde 1986 hasta 1997, más atenuado en años posteriores, recibió reconocimiento internacional. Su dinamismo y muy especialmente la fuerza exportadora fueron elogiados por muchos países y organismos internacionales. En efecto, desde 1990 a la fecha se ha triplicado el producto per cápita, se han multiplicado varias veces las exportaciones, se ha modernizado la infraestructura básica y la acumulación de capitales ha sido de tal envergadura que ha obligado a los empresarios a trascender las fronteras e invertir masivamente en el exterior, especialmente en los países de América Latina. Un país pequeño necesita bases de reproducción que trasciendan las fronteras nacionales. Es el caso de Chile.

La estricta valoración del crecimiento por economistas y políticos —y su asimilación al concepto de desarrollo— con una preocupación subsidiaria por lo social, atendida por políticas asistenciales, redujeron la pobreza, pero no sirvió para reducir la brecha de las desigualdades. Al mismo tiempo, se amplificó la diferencia territo-

rial entre la modernidad alcanzada por la Región Metropolitana y el resto de las regiones del país. Las desigualdades requieren otro tipo de medidas, que cuestionan la esencia del modelo y la Concertación no tuvo ni valentía ni voluntad para implementarlas. A final de cuentas, los economistas y políticos de la Concertación se subordinaron al modelo que había sido instalado por el gobierno civil-militar.

El hecho ineluctable es que la mala distribución del ingreso, la concentración de la riqueza y la extrema centralización del poder económico/político en Santiago han sido consecuencia inevitable del énfasis exclusivo que se ha colocado en el crecimiento. Un crecimiento sin dirección estratégica, en que el mercado asigna sin mediación alguna los recursos y el Estado se convierte en un ente pasivo, sin autoridad para orientar el desarrollo, han sido factores determinantes en el estilo de modernización que ha adoptado el país; vale decir, concentrador y marcado por profundas desigualdades.

En la visión neoliberal las fallas del mercado se corrigen con más mercado. El mercado es perfecto, el ser humano es imperfecto. El mercado contiene una promesa de salvación en el grado en el cual es sacralizado como tal. Por tanto, no se debe reaccionar ni a las distorsiones de la división social del trabajo ni de la naturaleza, sino tener fe en el mercado. La fe salva.» (Boeninger, 1997: 115).

El puro crecimiento económico subordinado estrictamente al mercado, con em-

presarios rentistas en la producción de recursos naturales, sin una política que favorezca una mejor distribución del ingreso, con escasas regulaciones, junto a un sistema impositivo regresivo y una política económica conservadora han otorgado una inmensa fuerza material a los grupos económicos. Ello les ha permitido controlar plenamente el poder político. Por iniciativa propia y también por debilidades de los gobiernos de la Concertación, se convirtieron de facto en una suerte de partido político.

Así las cosas, los grandes empresarios se adueñaron del aparato productivo, a muy bajo costo, gracias a las privatizaciones de las empresas públicas, que impulsó el gobierno civil-militar en los años ochenta (Cámara de Diputados, 1990). Pero también se han instalado en la banca y, en los servicios públicos¹⁰. Adicionalmente, se han comprado los medios de comunicación social, escuelas, universidades, clínicas, ISAPRES, AFP y equipos de fútbol. Con ese poder material y comunicacional han podido instalar sus ideas en la opinión pública con escasos contrapesos. Eso mismo les ha permitido forzar a los gobiernos a favorecer sus intereses, ayudados además por los lobistas de la «centro-izquierda»:

Los niveles de concentración de riquezas en Chile y valor del patrimonio neto de algunos grupos económicos, familias y personas en

¹⁰ También gracias a las privatizaciones bajo el gobierno de Pinochet. Pero hay que señalar que gran parte de las sanitarias fueron privatizadas durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Chile son altos incluso a nivel internacional. Según la revista *Forbes*, en el 2008 en Chile hay cuatro familias/personas que son multimillonarios, es decir que tienen un stock de activos valuados sobre mil millones de dólares: Luksic, Matte, Angelini y Piñera. La riqueza combinada de estas cuatro familias (en una población de cerca de 16 millones) representa cerca del 12.5% del PIB chileno en el 2008. Como referencia, en los Estados Unidos hay 406 multimillonarios en el año 2007 (en una población de 300 millones) cuyas fortunas combinadas alcanzan a más o menos el 10% del PIB del país. Parece que la riqueza en Estados Unidos está menos concentrada que en Chile.» (Solimano, 2009).

En los dos últimos años la riqueza de los grupos económicos ha seguido expandiéndose, lo que permite al grupo Paulmann ingresar al club de los más ricos, como lo revela el cuadro 1. En éste se muestra además la inmensa acumulación de riqueza de los grupos en el relativamente breve período de diez años,

CUADRO 1
RIQUEZA DE GRUPOS ECONÓMICOS EN CHILE
(EN MILES DE MILLONES DE US\$)

	Riqueza en 2002	Riqueza en 2010
Luksic	1.4	19.2
Matte	1.5	10.2
Paulmann	1.0	10.5
Angelini	1.0	6.0
Piñera	1.0	2.4
Total	5.9	48.3

Fuente: Revista *Forbes*, destacado por Eugenio Figueroa y Ramón López (2012)

precisamente durante los gobiernos de la Concertación.

La concentración económica recibió un primer impulso con las privatizaciones del gobierno de Pinochet; pero, posteriormente gracias a los gobiernos de la Concertación la acumulación de capitales de los grupos económicos adquirió proporciones extraordinarias. En democracia se legitimaron las privatizaciones poco claras de los años ochenta (Cámara de Diputados, 1990), pero también se impulsaron algunas otras, como los casos de las sanitarias, carreteras y caminos. Sobre esa base material y de propiedad, unido a las políticas impositivas y de facilitación financiera la acumulación de capitales de los grupos económicos adquirió proporciones inéditas.

Cómo veremos más adelante, el régimen impositivo chileno ha sido extremadamente generoso con las grandes empresas y sectores ricos de la población. Por otra parte, la inédita ampliación del sistema crediticio desde la banca hacia multitiendas y supermercados ha facilitado inmensas ganancias a esos grupos, como se ha destacado arriba. Finalmente, la apertura comercial y financiera de la economía chilena, mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC), componente central de la política internacional del país, ha permitido una reproducción a escala global de los inversionistas chilenos en el exterior.

En consecuencia, no es una exageración afirmar que el Estado ha sido capturado por una minoría económica que lo utiliza en su favor. En vez de servir como instrumento para compensar las desigual-

dades propias de la economía de mercado se ha convertido en instrumento de ampliación del poder económico. Bajo tales condiciones, el sentido comunitario de nación se encuentra debilitado con la presencia de un Estado frágil, al servicio de una minoría y que ideológicamente se considera un estorbo. La economía de mercado se ha convertido en una sociedad de mercado, donde el objetivo supremo es el lucro y el enriquecimiento personal. Y, cuando la política no interviene en el mercado, la sociedad puede verse peligrosamente afectada:

La asignación de recursos y la repartición de ingresos por el mercado –sin intervención de la democracia– conducirían probablemente a una inseguridad económica radical que ninguna sociedad podría tolerar durablemente sin reacciones violentas. Esta inseguridad es tanto más grande cuanto las economías de mercado son habitualmente sometidas a numerosos shock y que, con la globalización aumenta su frecuencia. Y sus consecuencias son más devastadoras en la medida que las poblaciones son vulnerables, es decir cuando el nivel del desarrollo del país es débil y el sistema de protección social embrionario. (Fitoussi, 2004).

Sin estrategia de desarrollo, o si se quiere con una estrategia de desarrollo implícita que se reduce al crecimiento, la política económica deja de ser un orientador de agentes y recursos y se convierte en un instrumento más de las decisiones del mer-

cado, lo que en definitiva favorece el accionar del gran capital y la concentración económica en pocas manos. Ello especialmente en condiciones de una economía con empresarios rentistas en la producción de recursos naturales y con una manifiesta presencia oligopólica en todos los sectores de la economía. Así se amplifica la concentración económica y el poder político del gran capital.

Así las cosas, se estrechan las oportunidades de progreso a los pequeños empresarios, se coloca en condiciones de fragilidad a los trabajadores, se debilita la protección del medioambiente y la concentración económica en Santiago se amplifica. Bajo tales condiciones se cierran las oportunidades para avanzar hacia una sociedad desarrollada, con una distribución más equilibrada del poder económico (y también político) e incluso el propio crecimiento a la larga se oscurece.

Frente a grupos económicos tan poderosos encontramos un Estado débil, incapaz de regular adecuadamente y al mismo tiempo sin capacidad, ni instrumentos legislativos, que le permita promover iniciativas económicas o que pueda favorecer, con políticas de discriminación positiva, el potencial de los pequeños empresarios. Hay que destacar que la propia Constitución de 1980 prohíbe al Estado impulsar iniciativas empresariales. Este mismo Estado, cooptado por los grupos económicos, tampoco se ha interesado en estimular el sindicalismo y la negociación colectiva, fundamento indispensable para el mejoramiento del equilibrio distributivo.

Recursos naturales y medio ambiente

La base material sobre la que se sustenta el modelo económico chileno es una estructura productiva en que prima la explotación y exportación de recursos naturales. Para la actividad empresarial ello resulta en extremo rentable, al recibir gratuitamente la concesión del recurso natural, lo que representa un beneficio adicional a las ganancias normales del negocio. Por tanto, una renta perteneciente a todos los chilenos resulta apropiada por una minoría.

En Chile, la producción y exportación de recursos primarios es muy elevada. Las exportaciones de materias primas agrícolas, alimentos, combustibles y minerales representan el 32% de las exportaciones totales. Esa cifra es notablemente superior si se la compara con el 8.9% promedio de América latina y El Caribe, y el 4% de los países de la OCDE (Figueroa y López, 2012).

Chile principalmente, pero también gran parte de los países de América Latina, y por cierto los de África, a diferencia de los países asiáticos exportadores de manufacturas, se encuentran acorralados en la producción de recursos naturales. La histórica división del trabajo propia del siglo XX entre países industrializados y productores de materias primas, ha abierto paso a una redefinición de la división del trabajo en el siglo XXI.

En efecto, en la actualidad China y la India son países en pleno proceso de industrialización, fuente principal de producción de todas las manufacturas en el mundo. En cambio, los países de Europa, Japón y los Estados Unidos, han concen-

trado sus fuentes de negocios en el dominio del capital financiero así como el control de la propiedad industrial e intelectual. Y, los países de América Latina y África centran sus esfuerzos en la producción de alimentos y materias primas para abastecer el desarrollo chino. Esta redefinición de las cadenas productiva a nivel mundial coloca límites muy estrechos al desarrollo de los países de América Latina y su desafío exigirá mayores esfuerzos para las políticas públicas nacionales si se desea alcanzar el desarrollo.

En Chile, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo no se aplica royalty por la explotación de los recursos naturales¹¹. Vale decir, no se encarece su producción por la renta que de ellos se extrae, la que es captada gratuitamente por los dueños de las empresas. Por tanto, no se valora el costo que significa para todos los chilenos esa explotación. En el caso del cobre y otros minerales sólo se aplica un impuesto a las utilidades de las empresas, manifiestamente reducido en comparación a la mayor parte de países del mundo. Bajo tales condiciones el mercado estimula, entrega señales, para que la inversión se dirija hacia la explotación de recursos naturales, mientras el Estado, con ese regalo que entrega a las empresas, y adicionalmente con su «comportamiento neutral» en otros ámbitos económicos, desincentiva las iniciativas para la producción de bienes y servicios de transformación.

¹¹ A partir de 2005 se acordó un impuesto específico al cobre, que en 2010 aumentó durante el gobierno de Piñera.

Así las cosas, con el camino productivo que ha adoptado el país, fundado en la explotación de recursos naturales, independientemente de los ciclos de crecimiento, la tendencia estructural a largo plazo, no ayuda a la creación de empleo y cuando lo hace se caracteriza por su precariedad. Al mismo tiempo, como es obvio, ese modelo productivo presenta insuficientes encadenamientos hacia la economía interna y elevada fragilidad frente a las fluctuaciones internacionales. A ello se agrega una política deliberada de tratados de apertura comercial y financiera (TLC) con gran parte de los países del mundo, lo que favorece aún más la exportación de recursos naturales.

En términos más concretos, la actividad productiva en Chile tiene su eje en la explotación intensiva de los bosques, aguas y riquezas minerales. El cobre, molibdeno, productos del mar, madera, celulosa, vinos y frutas concentran la producción y exportación de la economía chilena. Los anuncios de mediados de los noventa para avanzar una segunda fase exportadora o, a finales del gobierno Bachelet de agregar valor a los productos, mediante una estrategia de clusters, no se han materializado. Han sido sólo retórica, se han quedado en las palabras.

Mientras se sobreexplotan las riquezas básicas no renovables, y sus beneficios se concentran en una minoría empresarial que los produce y exporta¹², en algunos

¹² Según cifras de Aduanas, SII y SERCOTEC el 94% de las exportaciones los realizan grandes empresas.

territorios el medio ambiente se ha visto crecientemente afectado. Ello explica la protesta de las ONG y movimientos ciudadanos en defensa del agua, los bosques y recursos marítimos. La actitud impasible del Estado y su subordinación a las empresas nacionales e internacionales, explotadoras de los recursos naturales, han acrecentado la desconfianza frente a la autoridad y aceleran las movilizaciones ciudadanas.

Los grupos económicos que explotan los recursos naturales no sólo no pagan suficientemente impuestos ni tampoco royalty por la renta que significa su explotación. Adicionalmente, agotan los recursos y destruyen el medioambiente, con elevados costos para la sociedad, especialmente para los sectores más modestos.

La sobreexplotación de los recursos naturales coloca un serio desafío a la sustentabilidad del desarrollo del país. La baja de la ley del cobre exige esfuerzos de inversión adicionales a corto plazo; el agua se está convirtiendo en un recurso crecientemente escaso, especialmente en las zonas mineras, dónde es utilizada abundantemente para las faenas productivas. En el sector pesquero, por efectos directos e indirectos, la sobrepesca industrial ha provocado el colapso y sobreexplotación de los principales recursos marinos. Paralelamente, la industrialización de los salmones ha afectado seriamente el fondo marino y ha extinguido varias especies que alimentan precisamente a los salmones. El arrasamiento del bosque nativo, ha sido práctica recurrente; y ésta disminución ha venido

acompañada de un aumento en las plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto¹³.

Por otra parte, como consecuencia de la densificación de Santiago y el crecimiento irracional del automóvil, los impactos medioambientales han sido severos con la emisión incontrolada de gases a la atmósfera. La cuenca de Santiago se encuentra completamente saturada, con serios efectos en la salud de niños y ancianos. En efecto, la centralización de las actividades económicas en Santiago y la presión permanente por aumentar la urbe mediante el cambio del uso del suelo, han impactado seriamente el medioambiente de la capital del país. Este fenómeno tiende a repetirse en otras capitales regionales.

Los recursos naturales son indispensables para la vida, su cuidado y preservación constituyen un compromiso con las generaciones venideras. Pero, además, la degradación de los suelos provocada por la erosión y el abuso con los productos químicos, así como la mala gestión de los recursos hídricos, ha afectado especialmente a los pequeños productores y a los sectores más pobres de las poblaciones del país.

La pobreza conduce a la deforestación por el uso inapropiado de la madera y otros recursos contaminantes, acelerando la de-

gradación del medio ambiente. Al mismo tiempo, la contaminación de las aguas, especialmente provocada por las explotaciones mineras, de la celulosa y del cultivo de salmones en Chile, no sólo ha destruido los activos económicos, sino también se ha convertido en una amenaza seria para los habitantes en las zonas afectadas.

Existen casos paradigmáticos que han afectado a los sectores más modestos del país. La contaminación provocada por la empresa ENAMI, en la 5ª región, ha perturbado seriamente la salud de los niños de Puchuncaví, afectándolos con metales pesados. La utilización intensiva de las aguas por las explotaciones mineras en el norte del país ha provocado una inédita escasez de agua en la zona de Antofagasta. Por último, la explotación sin regulación del salmón, ha contaminado gravemente las aguas marinas del sur de Chile, y al mismo tiempo, ha agotado los recursos marinos para los artesanos que capturan en zonas previas a cinco millas.

Si se desea efectivamente ingresar al desarrollo se debiera apuntar al objetivo de conformar una estructura productiva y exportadora diversificada, que incorpore mayor valor agregado nacional a los bienes y servicios, que favorezca la sustentabilidad y reduzca los costos medioambientales de la matriz productiva actual. Así ha sido en los países que en las últimas décadas han alcanzado el desarrollo, como Corea y Finlandia. Estos han crecido a elevadas tasas, expandiendo el ingreso per-cápita; pero, simultáneamente han mejorado la distribución del ingreso, gracias a la exis-

¹³ El bosque nativo ha sufrido una manifiesta reducción desde el año 2000 a la fecha. La explotación del salmón afecta los fondos marinos ya que su alimentación exige la sobreexplotación pesquera. A su turno, el establecimiento de cuotas pesqueras constituye una captura de rentas que les garantiza ganancias extraordinarias.

tencia de elevados niveles de sindicalización y negociación colectiva, así como con políticas deliberadas a favor de las pequeñas empresas y, por cierto, con políticas sociales universales y no asistenciales

El destacado economista coreano de Cambridge, Ha Joon Chang, sostiene que:

La esencia del desarrollo económico es impulsar industrias no vinculadas con recursos naturales. ¿Por qué Japón produce autos, Finlandia teléfonos celulares o Corea acero? Porque las ventajas se crean. (Chang, 2010).

El actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un documento del año 2000, junto a los economistas Sachs y Warner, ratifica esta tesis:

Chile no se ha integrado a la economía mundial como un innovador independiente o como generador de tecnologías de vanguardia, sino como un proveedor de unos pocos recursos naturales. Así, la vocación a largo plazo de Chile ha sido en los últimos 150 años como proveedor de recursos naturales agrícolas, de clima templado, bosques, pesca y principalmente minería. Uno de los principales temas de este ensayo es que estos sectores son insuficientes para impulsar a Chile hacia una etapa de elevado crecimiento del ingreso. Chile tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente probable que experimente una caída en su crecimiento. (Larraín, y Warner, 2000: 22y 23)

Para que se produzca una transforma-

ción productiva en favor de la diversificación es indispensable un cambio de mentalidad en la dirección del Estado, que apunte deliberadamente a crear ventajas competitivas. Pero, para ello es preciso dar una orientación al desarrollo y además promover un decidido esfuerzo de inversión en ciencia y tecnología, así como adoptar un compromiso nacional para mejorar radicalmente la calidad de la educación formal y la capacitación de los trabajadores. Ello exigiría también una política cambiaria activa, para estimular la actividad exportadora de las empresas de transformación, y de los pequeños y medianos productores. Nada de ello estuvo presente durante los gobiernos de la Concertación ni tampoco se encuentra con el gobierno de Piñera.

Los gobiernos de la Concertación aceptaron el rol pasivo del Estado, tal cual había sido establecido por los economistas de Pinochet. Al mismo tiempo no modificaron el carácter «neutral» de la política económica, vale decir en que el mercado asigna sin mediaciones los recursos. No fueron tampoco capaces de fortalecer la posición negociadora del movimiento sindical ni tampoco recuperaron para las instituciones públicas la capacitación de los trabajadores. En cuanto a ciencia y tecnología, se han mantenido bajísimos niveles de inversión (apenas 0.5% sobre el PIB, cuando los países de la OCDE superan el 2%).

Así las cosas, el país se encuentra sujeto a los vaivenes de los precios de las materias primas en la economía mundial. Y cuando la economía crece y aumenta el empleo éste

mantiene elevados grados de precariedad¹⁴, como sucede en los tres últimos años gracias a un elevado precio del cobre. Por otra parte, en cuanto a capacitación de los trabajadores, todos los institutos técnicos, que dependían del sector público, fueron entregados en 1989 a los gremios empresariales. El Estado perdió entonces una institucionalidad decisiva para apoyar la formación de los trabajadores. Además los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependientes del Ministerio del Trabajo, han sido inútiles y muchas veces utilizados en aprovechamiento de campañas políticas.

Al mismo tiempo, la educación formal, tan fundamental para mejorar la productividad, se ha venido deteriorando gravemente en los últimos 30 años, como lo destaca el movimiento estudiantil insistentemente. En cuanto a política cambiaria, ahora sin regulación alguna, sujeta a los vaivenes del mercado, ha dado por resultado una baja sistemática del precio del dólar, con una adicional inestabilidad escasamente útil para favorecer las exportaciones. En efecto, dado el elevado precio del cobre, el dólar se ha convertido en una tortura para los exportadores de manufacturas y pequeños empresarios, lo que los deja al margen de la actividad exportadora, mientras por otro lado el precio de la divisa estimula vigorosamente las importaciones de suntuarios.

Las autoridades económicas se mues-

¹⁴ Trabajadores sin contratos formales o subcontratados; trabajadores sin derechos vacaciones, salud, previsión social, etc.

tran complacidas con el ahorro que realizan en el exterior gracias a los mayores recursos generados por el alto precio del cobre, pero no despliegan mayores esfuerzos de inversión y promoción para apoyar programas de diversificación de la matriz productiva y exportadora de recursos naturales, que caracteriza a nuestro país. En estas condiciones, parece oscuro que la economía chilena y sus habitantes puedan alcanzar las fronteras del desarrollo en un periodo cercano, y más bien, las futuras generaciones se verán en peligro cuando se produzca el agotamiento de los recursos naturales

En suma, las condiciones objetivas que caracterizan a la globalización en curso, así como la inexistencia de esfuerzos para impulsar la transformación de la estructura productiva, apuntan a un tipo de crecimiento que no favorecerá el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Estado ha sido incapaz de regular los mercados y tampoco promueve políticas masivas y eficaces para favorecer a los pequeños empresarios, los que vienen reclamando consistentemente por la usura de la banca en los créditos que deben contratar¹⁵.

Por otra parte, la política económica mantiene una pasividad sorprendente, conservando la neutralidad que le exige la Constitución del 80, coherente con la con-

¹⁵ Las diferencia de tasas de interés entre la gran empresa y la mediana es de tres veces; mientras esa misma diferencia entre la gran y pequeña empresa es de diez veces. Y el único banco público existente en el país, el Banco-Estado, aplica la misma política de la banca privada respecto de los préstamos.

cepción neoliberal. Bajo tales condiciones, la política económica ha servido para que amplifiquen sus negocios los grandes empresarios. Vale decir, no hay indicaciones para los agentes económicos en nuevos campos de inversión, ni a favor de los espacios territoriales que permitan el despliegue de iniciativas económicas que más necesita el país. Con un Estado inmóvil y una política económica «neutral» las ganancias del crecimiento han favorecido a los grandes empresarios, especialmente a los productores de recursos naturales, virtualmente subsidiados, mientras esa política ha frenado las potencialidades productivas de los trabajadores y pequeños empresarios.

A partir de 1998, las limitaciones al crecimiento se convirtieron en eje de discusión de economistas y políticos. En efecto, la actividad económica se redujo como consecuencia de la crisis asiática, y luego, con la crisis sub-prime en 2008-2009. Frente a tal situación, la SOFOFA, la Confederación de la Producción y del Comercio y los economistas neoliberales argumentaban que la disminución del dinamismo de la inversión y el empleo radicaba en una supuesta «inflexibilidad laboral» y en los «elevados impuestos» que existirían en Chile.

Esos dos argumentos resultaban insólitos en un país con muy bajos impuestos a las empresas y con elevada precariedad laboral. Por tanto, las limitaciones en la inversión y empleo, en aquellos momentos de crisis, no estaban relacionadas con insuficientes señales de confianza a favor del

empresariado. Por lo demás los cambios laborales o tributarios que han impulsado los gobiernos de la Concertación han sido bastante cosméticos y no han afectado la rentabilidad empresarial.

En realidad, los reclamos empresariales sobre falta de confianza ocultan la preocupación por la disminución de las tasas de ganancias extraordinarias que disfrutaron los exportadores de recursos naturales y los empresarios centrados en actividades de infraestructura (principalmente telecomunicaciones, electricidad) y sector financiero entre 1985 y 1997. Situación que se ha modificado radicalmente en los últimos años gracias a la bonanza de los precios de los recursos naturales y a los nuevos mecanismos de extracción de excedente en el sistema financiero¹⁶.

Retomar un crecimiento dinámico y no sujeto a los vaivenes de la economía mundial, con mayores inversiones para generar empleo y de carácter estable no se logrará con un esfuerzo desesperado por disminuir la capacidad de negociación sindical o con una actitud contemplativa respecto del sistema impositivo. Se requiere apuntar a actividades nuevas, de mayor valor agregado que las existentes, las que necesitarán, como en el pasado, de instrumentos de fomento y estímulo para impulsar un crecimiento dinámico.

Por otra parte, el replanteamiento estratégico deberá tener en su centro neurál-

¹⁶ Me refiero al régimen de tarjetas de crédito a consumidores y pequeños empresarios, con tasas de interés usurero, vigentes en la banca, supermercados y multitiendas.

gico a las pequeñas y medianas empresas, puesto que en ellas radica la fuente más vigorosa de generación de empleo y pueden llegar a desempeñar un rol destacado en la eventual diversificación de la matriz productiva, con adecuadas políticas de promoción. Éstas, sólo con apropiadas políticas de crédito y de modernización podrán competir en el mercado local e internacional y, al mismo tiempo, asegurar niveles de empleo que no ofrecen los actuales grupos económicos que articulan a las grandes empresas asociadas a los recursos naturales y al sistema financiero.

En la matriz productora y exportadora de recursos naturales se encuentra la base material de las desigualdades y abusos que originan hoy día las protestas ciudadanas. En efecto, como hemos señalado, la extracción de minerales, bosques y utilización de los mares, sin el pago de las rentas y sin las compensaciones medioambientales aceleran las protestas de trabajadores, mapuches, pescadores, medioambientalistas e incluso ciudades mineras, como Calama. Esa misma matriz productiva es la que concentra la riqueza en unas pocas empresas, nacionales y extranjeras, genera empleo precario y al mismo tiempo no difunde los frutos del crecimiento hacia todas las regiones.

La estrategia de desarrollo importa

La economía disminuyó notablemente su ritmo de crecimiento a partir de 1998, con una tasa media inferior al 3% mientras que en el período 1986-1997 bordeaba el 7%.

El ciclo expansivo, de elevado creci-

miento en la economía chilena, se fundó en el libre mercado, es cierto. Pero es preciso reconocer que en ese periodo los subsidios estatales fueron fundamentales para la expansión del sector forestal, la pesca, frutas, vino y, junto a ello, con un sector cuprífero privado que casi no paga impuestos¹⁷. Una economía de mercado con una manifiesta captación de recursos de origen rentista ha sido determinante para las elevadas ganancias empresariales.

La explotación y exportación de recursos naturales, sin mayores avances hacia el procesamiento de los mismos, encuentra limitaciones a mediano plazo, en el mercado internacional. Los éxitos de la fruta y los vinos chilenos se enfrentan hoy día con nuevos exportadores que provienen de variadas latitudes, en particular de los propios vecinos así como de países del Pacífico y del este de Europa. Las exportaciones de salmón han entrado en fuerte competencia con algunos países nórdicos que además nos acusan de un mal manejo productivo y de mercado. El cobre ahora experimenta un ciclo expansivo de precios, gracias a la agresiva industrialización china, pero a la larga se verá enfrentado a la sustitución por los nuevos materiales, entre otros la fibra

¹⁷ A ello hay que agregar la acumulación primaria que significaron las privatizaciones de las empresas del Estado, a bajo precio, para beneficio de un grupo de empresarios. Del mismo modo, la quiebra de la banca en los años 1982-1983 y el subsidio que el Estado les otorgó fue otro favor de apoyo público al mundo empresarial. Finalmente, un sistema económico virtualmente sin derecho a sindicalización y negociación colectiva fue factor fundamental de apoyo al mundo empresarial.

óptica. Además, su ley se ha reducido y se requieren masivas inversiones para mejorar su eficiencia. Finalmente, las plantaciones forestales reciben la persistente acusación de destrucción del bosque nativo por parte de las organizaciones medio-ambientalistas, mapuches y de los propios gobiernos de países desarrollados.

Bajo tales condiciones, algunos empresarios han hecho esfuerzos tecnológicos y mejoramientos de productividad para recuperar tasas de rentabilidad. La consecuencia de ello ha sido una sistemática disminución de la mano de obra en relación al capital invertido. A ello se agrega el desafío de sustentabilidad que significa el agotamiento de la biomasa pesquera así como de las fuentes mineras, la degradación del bosque nativo y el uso indiscriminado de pesticidas.

La banca, en un marco de decidida apertura de la economía chilena, se ha concentrado aceleradamente. Así, se observa en los últimos años una agresiva compra de bancos tanto por el capital nacional como del internacional, en particular el español. La consecuencia natural del proceso de concentración de la banca, con escasas regulaciones han sido tres. En primer lugar, un control oligopólico del mercado que les ha permitido altas ganancias. En segundo lugar, la no transmisión de las reducciones de la baja de la tasa orgánica del Banco Central hacia las pequeñas empresas, lo que golpea duramente a los pequeños empresarios, fuente principal del empleo en Chile. En tercer lugar, la compactación de los bancos ha generado un

alto desempleo en los trabajadores del sector financiero.

En el sector servicios, principalmente telecomunicaciones y energía, los empresarios nacionales, gracias a las privatizaciones y altas ganancias derivadas de las escasas regulaciones hicieron una gran acumulación. Cuando detectaron la atenuación del ritmo de crecimiento económico y un mayor grado de regulación, que les impedía continuar con sus ganancias extraordinarias, optaron por vender sus activos a capitales españoles. A diferencia de los capitalistas nacionales, las empresas españolas, que marginan utilidades a nivel internacional, basan su desarrollo en la masa general de ganancias que generan sus sucursales en toda América Latina y en muchas otras latitudes del mundo.

Así las cosas, la preocupación en torno a la diversificación de la matriz productiva y una nueva estrategia de desarrollo resulta fundamental. Si no se modifica la estrategia económica vigente, la estructura productiva y el desempleo precario persistirán. Esto debe complementarse con un Estado que oriente el desarrollo y una política económica verdaderamente activa, terminando así con el ideologismo de la neutralidad del mercado. Ello debiera favorecer también a los pequeños empresarios mediante políticas de crédito y fomento que terminen con la expoliación que sufren por parte de la banca.

Impulsar una nueva estrategia de desarrollo no resulta fácil con la Constitución de 1980. En efecto, en ella se consagra el Estado subsidiario lo que impide al sector

público participar directamente en actividades económicas así como regular eficazmente el mercado. En consecuencia, se requiere una nueva Constitución no sólo para favorecer la participación democrática del conjunto de la ciudadanía, sino también para impulsar una estrategia productiva y de inserción internacional que privilegie la transformación de nuestros recursos naturales y potencie el conjunto de las fuerzas productivas.

3. *Desigualdades sociales y abusos*

Aunque el crecimiento ha favorecido cierto derrame para reducir la pobreza, la desigualdad en el ingreso revela que ese derrame no alcanza para disminuir la inmensa brecha que separa las ganancias del capital y los ingresos del trabajo. A esa brecha existente en la base productiva de la economía se agregan los inmensos costos que significan la educación y salud privada para las capas medias, así como la precariedad de esos servicios para los sectores populares, junto a un sistema de pensiones, de carácter privado (AFP), que no asegura una vejez digna a los adultos mayores. Así las cosas, las desigualdades se hacen manifiestas en la base productiva y se extienden al ámbito social.

Adicionalmente, la fragilidad de un Estado reducido y la falta de voluntad política han impedido el establecimiento de mecanismos regulatorios adecuados y ágiles que impidan los abusos que sufren los consumidores en multitiendas y supermercados, o aquellos que afectan a pequeños

empresarios con la banca¹⁸.

Por otra parte, existen reclamos persistentes de los clientes sobre las cuentas de los servicios públicos. La carga de la prueba radica en las personas lo que convierte en un trámite engorroso y costoso la aclaración de errores y arbitrariedades. Finalmente, los usuarios del transporte en Santiago viven una pesadilla cotidiana, tanto por sus elevados costos y baja calidad, así como por la gran cantidad de tiempo que deben destinar desde sus viviendas, en la periferia de la capital, hasta sus lugares de trabajo.

Un Estado frágil ha permitido que los abusos proliferen. Su capacidad de regulación es cercana a cero. Mientras los abusos se hacen manifiestos, la encuesta CASEN (que mide pobreza y desigualdades) nos reitera una y otra vez la dramática realidad de la desigualdad del ingreso en el país. Aun considerando los recursos monetarios focalizados, que complementa el Estado a los más pobres, mediante la política asistencialista, la brecha de ingresos no se modifica.

El coeficiente de Gini aplicado a los llamados ingresos autónomos, es decir a los ingresos generados por las personas en el mercado o el sector público, pero antes de transfe-

¹⁸ El caso de la multitienda La Polar es el más reciente, la que no sólo cargaba con costos insostenibles en las tarjetas de crédito a consumidores modestos, sino que además utilizó a sus clientes para maquillar su contabilidad, convirtiendo cifras negativas en positivas. Ello significó también un engaño a los accionistas de la multitienda.

rencias del estado, registra un valor promedio de 56.7 para el periodo 1987-2006. Cuando se calcula el valor promedio del coeficiente de Gini para el mismo periodo a los ingresos monetarios que sí incluyen el valor de las transferencias del estado éste baja, levemente, a 55.6. Es importante destacar que la relativa constancia del coeficiente de Gini, a pesar de la aceleración en el crecimiento y la disminución de la pobreza de ese periodo. Por otra parte la participación en el ingreso total del 10 por ciento más rico se mantiene casi constante en el periodo 1987-2006 y durante casi todo el periodo de transición a la democracia. (Solimano, 2009).

La relación 20/20, vale decir entre el quintil más rico y el más pobre es uno de los más altos del mundo; en cambio es de 10:1 en los Estados Unidos e Inglaterra y sólo de 5:1 en los países europeos.

El mundo del trabajo

La sindicalización y negociación colectiva son fundamentales para que los trabajadores puedan mejorar su posición en el ingreso nacional. Lamentablemente, esos indicadores no han progresado en las últimas décadas. Ha sucedido lo contrario, con la disminución de la tasa de sindicalización y la reducción del porcentaje de trabajadores que pueden negociar colectivamente. La sindicalización ha pasado desde una cifra superior al 15% de la fuerza de trabajo para alcanzar apenas un 12% en el 2010. En cuanto a la negociación colectiva ésta ha disminuido desde el 11% en 1991 al 5% en el 2010. Ello explica, en parte, la dificultad para alcanzar mejores salarios, en correspondencia con la elevación del ingreso en el país. Los veinte años de gobiernos de la Concertación resultaron inútiles para fortalecer la presencia de la organización sindical en las actividades económicas.

CUADRO 2:
POBREZA Y DESIGUALDAD
(1990-2009)

Año	Pobreza (%)	Índice 20/20	Coefficiente Gini
1990	38.6	14.0	0.57
1992	32.6	13.2	0.56
1994	27.5	14.0	0.57
1996	23.2	14.8	0.57
1998	21.7	15.6	0.58
2000	20.6	14.5	0.58
2003	18.8	14.5	0.57
2006	13.7	13.1	0.54
2009	15.1	15.7	0.55

Fuente: encuesta CASEN 2009

De acuerdo a un estudio de la Fundación Sol, dentro de 10 países de América Latina, Chile obtiene la menor relación entre salario mínimo y el PIB per-cápita mensual. Además, ajustando los salarios de cada uno de los países a dólares PPA, Chile tiene el 7° salario mínimo más bajo. En cambio, también dentro de la región nuestro país figura con el 2° PIB per-cápita más alto de la región. Por otra parte, al comparar el nivel del salario mínimo chileno cuando los países de la OCDE tenían el mismo nivel de PIB per-cápita que Chile ajustado por PPA, se constata que el salario mínimo promedio para dichos países equivalía al doble de lo alcanzado por Chile (Fundación Sol, 2012). Consecuentemente, según la Fundación Sol el salario mínimo que correspondería en Chile en el año 2012 debiera ser \$270.000 y no la propuesta actual gobierno de \$ 193.000¹⁹.

A ello se agrega un factor adicional: la desprotección en el trabajo. Según la Fundación Sol el grado de protección de los trabajadores en las distintas actividades económicas es bajísimo. En efecto, según el «Índice de Empleo Protegido», elaborado por la Fundación, sólo el 39% de los ocupados a nivel nacional tiene un empleo protegido; esto significa, con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo. Además, dentro del aumento del empleo asalariado, durante los últimos 18 meses, el 100% corresponde a trabajadores tercerizados, los cuales, trabajando

para empresas contratistas o suministradoras de mano de obra, se encuentran con altísimas probabilidades de ser parte del grupo de empleos desprotegidos (Fundación Sol, 2011).

La mala distribución del ingreso difícilmente mejorará con estos bajos niveles de sindicalización y negociación colectiva, así como con la elevada precarización. Ésta ha llegado al extremo, inédito en el mundo, en que se paga por trabajar. En efecto, lo empaquetadores de los supermercados le pagan empresas externas subcontratadas para ocupar turnos de trabajo. A cambio de ello, los jóvenes empacadores reciben la caridad de los clientes, vale decir una propina voluntaria (Pizarro, 2012).

En lo que se refiere a la tercerización o subcontratación se apunta a dos propósitos. Por una parte, es un subterfugio para hacer difusa la persona del empleador, utilizando numerosas razones sociales, eludiendo así el pago de gratificaciones y cotizaciones previsionales. Por otra parte, la subcontratación, en vez de utilizarse para funciones distintas a las normales de la actividad (seguridad, aseo, etc.) se aplica en el giro oficial de la empresa. Con esta triquiñuela pueden coexistir en la empresa trabajadores que realizan las mismas labores, pero que pertenecen a una o varias empresas subcontratistas, lo que impide la sindicalización y la negociación colectiva.

Gracias a esos mecanismos se establece una sucesión de contratos precarios de duración limitada, en los que, artificialmente, se les fija un término vinculado con un proceso productivo o una actividad que

¹⁹ El salario mínimo actualmente es de \$ 182.000,

no corresponde con la realidad. Luego, vuelven a ser contratados, previo finiquito, completando un período de años sin estabilidad laboral. De esta forma y varias otras es que se ha acrecentado el trabajo precario en el país. Todo ello ha sido muy útil al mundo empresarial no sólo para disminuir los costos de la fuerza de trabajo sino y también para eludir la sindicalización y la negociación colectiva.

Finalmente, existe un factor institucional que debilita la condición de los trabajadores. El Estado cuenta con un escaso número de inspectores del trabajo, lo cual facilita las violaciones al Código del Trabajo. En efecto, a propósito del derrumbe que significó el sepultamiento y luego el feliz salvataje de los mineros en el norte de Chile ha quedado en evidencia que el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) apenas cuenta con 16 *inspectores para* más de 4.000 *faenas mineras*. Se reitera en este ámbito como en muchos otros la fragilidad de un Estado reducido, que la lógica neoliberal considera un estorbo.

En las condiciones descritas son explicables los bajos salarios existentes en el país en comparación a las altas ganancias que acumulan los grupos económicos. En efecto, nos informa la Fundación Sol que, de acuerdo a los datos de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Calidad de Vida y Salud (ENETS), el 90% de las personas que trabajan, ganan menos de \$650 mil pesos. Es incluso menos que el salario mínimo de la mayoría de los países de la OCDE (ajustando por paridad de poder de compra). Es decir, 9 de cada 10

trabajadores en Chile, gana menos que el salario mínimo promedio de los países avanzados. Además, el 76% de los trabajadores/as, gana menos de \$350.000. Y cuando se anotan estas cifras hay que considerar los elevados costos de educación y salud que existen en el país, normalmente gratuitos en los países desarrollados y también en otros países de América Latina.

La focalización cuestionada

La renuncia del Estado a la actividad productiva y la receta del «Consenso de Washington» de orientar la política pública a favor de la salud y educación atendiendo estrictamente a los más pobres ha modificado radicalmente la política social. Ésta asumió el enfoque de la focalización en reemplazo de la universalidad en educación y salud. En el ámbito de la previsión se optó por la capitalización individual, lo que terminó con el régimen solidario. La lógica de la focalización se remite a atender con recursos públicos las urgencias básicas de los sectores de extrema pobreza y el resto de la población debe atenderse en servicios privados (Pizarro, 2005).

En condiciones de una política fiscal restrictiva y un régimen impositivo que ha reducido las tasas a los sectores de altos ingresos y a las empresas (favoreciendo en cambio el aumento de los impuestos a las ventas), la oferta en salud y educación a las familias de bajos ingresos revela manifestos deterioros en calidad y dificultad de acceso.

Por otra parte, el modelo económico-social ha abierto las puertas para que el

mundo empresarial privado extienda sus negocios hacia el área social. Han nacido así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplican los establecimientos de enseñanza básica y media de carácter privado; éstos últimos con subvención estatal para los sectores de clase media. Paralelamente, ha proliferado el negocio de las universidades privadas.

En estas condiciones, vastas capas de población de ingresos bajos y medios viven en condiciones de gran vulnerabilidad, con elevados costos de los servicios de salud y educación o con servicios públicos que no cumplen requisitos mínimos de funcionamiento. Paralelamente, los grandes empresarios son propietarios de los sistemas de pensiones (AFP) y seguros de salud privados (ISAPRES) con modernas clínicas coligadas, a lo que adicionan el negocio de los establecimientos de educación básica, media, técnica y superior. Así las cosas, el área social se ha convertido en un jugoso negocio y además fuente de reproducción ideológica de la cultura e intereses del poder económico.

El gasto social en Chile, como se remite esencialmente a las políticas focalizadas, es muy reducido en relación al PIB, especialmente con un crecimiento sostenido en las últimas décadas que ha llevado el PIB per cápita a US\$ 16.000. En efecto, al comparar las cifras de gasto público social con la OCDE y países de América Latina, la situación de Chile se muestra desmedrada, especialmente en cuanto a educación y salud.

Educación reproductora de desigualdades²⁰

Las inmensas movilizaciones estudiantiles que remecieron a la sociedad durante 2011 pusieron en evidencia que la gran mayoría ciudadana desea modificar el actual sistema de educación en el país. El reclamo para que el Estado asuma su responsabilidad en la entrega de una educación pública, gratuita, de calidad y sin segregación social a todos los jóvenes de Chile, se ha instalado en la agenda nacional.

²⁰ Este apartado se basa fundamentalmente en el documento Educación 2013 elaborado por Hernán Frigolett, Alberto Mayol, Salvador Muñoz y Roberto Pizarro.

CUADRO 3
GASTO SOCIAL COMPARADO

Países	Total	Educación	Salud
Argentina	21.5	5.1	4.8
Brasil	23.7	4.9	4.5
Chile	12.4	3.3	2.8
México	10.9	3.9	2.7
Uruguay	20.7	3.7	3.6
América Latina	14.0	4.6	3.1
OECD	19.5	4.6	5.8

Fuente: OCDE y CEPALSTAT, en López y Figueroa

Desde la instalación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), en 1981, la educación básica y media segrega a los niños según barrio, ingreso familiar y tipos de escuelas. El 90% de los niños estudian en colegios municipalizados y privados subvencionados, destinados a sectores pobres y medios; mientras, el restante 10%, lo hace en colegios particulares.

La segregación se revela, entre otras cosas, en que 11 de los 13 mejores colegios que obtienen los más elevados puntajes de la PSU, son particulares y de los sectores más acomodados de Santiago. Así las cosas, la marcada división de clases de la sociedad chilena no se atenúa con la educación, aún cuando ésta se haya masificado. Hijos de ricos en escuelas particulares; hijos de clase media en particulares subvencionadas, y los pobres en las municipalizadas.

La educación no es asunto personal, de inversión individual, como sostiene el neoliberalismo. En realidad es al conjunto de la sociedad a la que debiera interesarle formar a todos los niños por igual, con integración de los menores de distintos orígenes sociales para promover la convivencia en comunidad, favoreciendo un mismo lenguaje y valores.

La escuela es el lugar donde se construyen vínculos sociales, donde nace el ejercicio de la democracia. Consecuentemente, la educación debiera servir para potenciar las capacidades de todos los seres humanos, fundamento del desarrollo económico. El aumento de la productividad, la adopción de tecnologías y procesos productivos sofisticados, así como la absorción

de información y conocimientos teóricos, y la educación cívica son fundamentales para el desarrollo económico y el progreso social de un país. Ello exige, entonces, una educación integrada socialmente y de similar calidad para todos los educandos.

Simultáneamente, la educación debiera favorecer una ética de respeto a los demás, sustentada en el compromiso de reducir la pobreza y desafiar las desigualdades sociales. Esto permitiría enfrentar la delincuencia y otros males sociales que afectan a nuestra sociedad.

Al final de cuentas, es preciso comprender que la educación es un derecho social, y es el Estado en nombre del interés público el que debe comprometer el uso de recursos públicos para potenciar áreas formativas e investigativas con miras al desarrollo del país.

La educación chilena es la más cara del mundo, lo cual reproduce las desigualdades. En efecto, las escuelas particulares subvencionadas que atienden la enseñanza básica y media reciben un subsidio por alumno, exactamente igual al que se entrega por cada educando de la enseñanza pública, vale decir, la atendida por los municipios. Caso extraordinario ya que esas escuelas subvencionadas son empresas privadas, cuyo objetivo es el lucro. Además, tales colegios no muestran mejores resultados que las escuelas municipalizadas.

Sin embargo, donde se manifiesta de forma dramática el elevado costo de la educación chilena es precisamente en la universidad. En efecto:

— La educación superior chilena es la más cara del mundo: Según ranking de la OCDE los aranceles universitarios que paga el alumno en nuestro país es más del doble que en los Estados Unidos, 3 veces México, cinco España, 18 veces Francia, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas, vale decir Argentina y Brasil, en Sudamérica y la mayor parte de los países de Europa.

— A diferencia de los países de la OCDE,

el financiamiento de los estudios universitarios en Chile en un 80% es responsabilidad privada; en cambio, en el resto de los países de la OCDE sólo el 30% es de financiamiento privado.

El pago por educarse en la universidad es expoliador para las familias de bajos ingresos y de sectores medios, e injustificado cuando su enseñanza no favorece un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados.

Los jóvenes profesionales se encuen-

CUADRO 4
COSTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PAIS	US\$ Promedio Anual	PIB per Cápita (1)	Precio relativo (2)
Chile	3.400	15.002	22,7
Corea	3.833	29.836	12,8
Japón	3.920	33.805	11,6
EEUU	5.027	47.284	10,6
Australia	3.915	39.699	9,9
Israel	2.658	29.531	9,0
Brasil	1.000	11.239	8,9
Canadá	3.464	39.057	8,9
N. Zelanda	1.800	26.966	6,7
Inglaterra	1.800	34.920	5,2
Holanda	1.700	40.765	4,2
Italia	1.100	29.392	3,7
España	798	29.742	2,7
Turquía	300	13.464	2,2
Austria	850	39.634	2,1
R. Checa	500	24.869	2,0
Bélgica	600	36.100	1,7
Polonia	300	18.936	1,6
Finlandia	500	34.585	1,4
Dinamarca	500	36.450	1,4
Irlanda	400	38.550	1,0
Suecia	300	38.031	0,8
Noruega	400	52.013	0,8
Francia	200	34.077	0,6

Fuente: Diario Estrategia 16 agosto, basado en OCDE, FMI, Gobiernos Centrales. (1) Corregido por paridad de poder de compra, (2) Gasto promedio en Educación / PIB per cápita X 100.

tran acosados durante muchos años por una banca que les exige la devolución de los créditos y el pago de altos intereses por esos estudios. Al mismo tiempo, esos estudios son de escasa utilidad para favorecer la promoción social, obtener trabajos de calidad y mejorar la productividad del país: la Encuesta Nacional 2010, que realizó el Instituto de la Juventud, informa que de cada diez trabajadores, ya sea técnicos o profesionales, seis no tienen un trabajo relacionado con lo que estudiaron²¹.

En consecuencia, el argumento que la educación es una inversión individual, que renta a futuro y por ello habría que pagarla, es inexacta. Primero, porque se trata de un bien público que renta socialmente. Segundo, porque en el caso de Chile, esa inversión no siempre es rentable individualmente.

El 90% de las familias chilenas reciben ingresos que no les permite financiar la educación de sus hijos. En efecto, según la encuesta CASEN del 2009, el primer decil de ingresos recibe mensualmente en promedio \$ 114.000, mientras el noveno decil obtiene \$ 1.150.000. Considerando que los aranceles mensuales son alrededor de \$ 300.000, es imposible que el 90% de las familias puedan pagar la educación supe-

²¹ Se estima que en Chile cada estudiante se gradúa con una deuda promedio de 40 mil dólares (20 millones y medio de pesos aproximadamente.). Además, el 40% de los estudiantes no logra titularse y de los titulados el 60% no ejerce lo que estudió. Estos son algunos de los datos que grafican el lamentable estado actual de la educación superior chilena y que gracias al movimiento estudiantil se han difundido y discutido masivamente.

rior para sus hijos, cuando a esa cifra hay que agregar los costos de salud, también muy elevados en el sistema privado de ISAPRES.

En consecuencia, la gratuidad de la enseñanza debiera operar sobre el 100% de las familias chilenas. La educación es un derecho social y como tal se garantiza cuidando su carácter de bien público. Su inclusión en un mercado altera el carácter universal, pues establece precios y rangos de calidad asociados a ello.

Los sectores con más solvencia económica, y en particular las empresas, deberían pagar, por vía impositiva, la educación de sus propios hijos y también la del resto de los niños chilenos. Eso sería justicia distributiva.

Por ello, es tan importante una reforma tributaria, de carácter progresiva, que asegure el financiamiento de la educación pública gratuita. Pero esa reforma no debe ser únicamente en función de las necesidades de nuestro sistema de educación pública, sino que también debe encargarse de las profundas transformaciones de nuestros sistemas de salud, previsión y otras necesidades que demanda la sociedad.

La educación clasista y cara existente es mala, porque no le entrega a los estudiantes adecuados instrumentos técnicos ni una visión del mundo que les permita progresar en la vida. En efecto,

— La mitad de los jóvenes de 15 años no entienden lo que leen. En matemáticas esos mismos jóvenes sólo compiten con los de su misma edad en Ghana y Bostwana. Lo dice la OCDE

y lo confirma la prueba PISA.

— La mala calidad y el clasismo no sólo tienen impacto negativo en los niños de más bajos ingresos, sino también en los de las familias acomodadas. En efecto, las familias de altos ingresos viven en barrios exclusivos completamente separados del resto de las clases sociales. Así las cosas, sus hijos al estudiar también en barrios y escuelas exclusivas para ricos tienen una visión restringida, distorsionada, del mundo: no comprenden la sociedad ni el mundo en el que viven.

En el ámbito universitario las cosas son aún más graves. Hasta los años setenta las universidades en Chile eran gratuitas y de calidad. Con la legislación pinochetista de 1981 se modificó el sistema. Se recortó el presupuesto a las universidades públicas y se permitió la universidad-empresa. Los más perjudicados han sido los jóvenes y sus familias, y los únicos beneficiados han sido los bancos y los grupos económicos que han extendido sus empresas hacia el sector educacional.

Así las cosas, se han multiplicado las universidades privadas en que impera el lucro y la mala calidad, con sucesivos escándalos²². Por otra parte, como el Estado no

²² Muy recientemente, Raúl Urrutia renunció a la Rectoría de la Universidad del Mar porque a mayo de 2012 se debía a los trabajadores 554 millones de pesos en cotizaciones previsionales, lo cual no fue obstáculo para que los controladores se pagaran, a través de sociedades inmobiliarias relacionadas, más de 600 millones de pesos. Ello, a pesar que formalmente el lucro es ilegal.

entrega recursos públicos suficientes a las universidades tradicionales, éstas también han elevado sustancialmente sus aranceles para poder sostenerse y han reproducido, en gran parte, la lógica de las universidades-empresas privadas (autofinanciamiento): elevada dotación de «profesores taxi», que van de una escuela a otra durante el día, y muy pocos académicos jornada completa; además, negocios de consultoría con empresas privadas y ministerios, los que en algunos casos han conducido a graves escándalos (MOP-GATE- Facultad Economía Universidad de Chile, entre otros)²³

En consecuencia, las tradicionales universidades chilenas, que fueron consideradas de gran nivel, hoy día se encuentran bajo las 400 mejores del mundo. Una lástima y una vergüenza. Porque la universidad debiera estar en el centro del desarrollo científico-tecnológico del país. Y debe vincularse a otros ámbitos de la sociedad chilena. Vale decir la universidad no es sólo docencia, sino investigación y extensión. Y ello exige académicos jornada completa. También la universidad hoy día ha cerrado las puertas a la democracia. No tienen derecho a participación los estudiantes y sus funcionarios. Y ellos deberían ser factor relevante de control de las actividades que

²³ Durante el gobierno del Presidente Lagos, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile recibía recursos del Ministerio de Obras Públicas para operaciones de triangulación que permitía pagar sobresueldos a los funcionarios del MOP. Este hecho motivó un largo enjuiciamiento a funcionarios públicos y de la Universidad de Chile, que se tradujo en condenas para varios de ellos. Este sistema se generalizó en el sector público.

allí se desarrollan.

En suma, la educación, al ser concebida como un negocio, genera un sistema que reproduce las desigualdades. Los jóvenes pobres y de capas media no encuentran en la educación el instrumento para su promoción social ni para mejoramiento de su productividad. Al mismo tiempo, la «libertad de mercado» ha creado una sobresaturación laboral para algunas profesiones, que tiene como consecuencia una presión a la baja de los salarios por debajo de la deuda promedio contraída para pagar aranceles.

Sistema de salud discriminador

Al igual que en la educación, en la salud se revela esa profunda desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena. La mortalidad infantil en Puerto Saavedra es 14 veces más alta que en Vitacura. La mortalidad infantil en Independencia es siete veces más alta que en Vitacura. Las expectativas de vida en zonas pobres son entre 10 a 20 años inferiores en relación a las ricas. Dos tercios de las horas médicas van al sistema privado que cubre menos de 1/3 de la población. Los recursos que por persona destina al Fondo Nacional de Salud (FONASA) para atender a sus cotizantes y a los indigentes son varias veces inferiores a los de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Sin embargo, los costos de administración de éstas son varias veces superiores a los de FONASA. A su turno, el servicio público debe atender muchas veces a los cotizantes de las ISAPRES, lo que debilita el quehacer público con los más

desamparados.

Las desigualdades en las condiciones de salud entre pobres y ricos y en los recursos para enfrentarlas entre el sector privado y público son, entonces, manifiestas. Pero, a ello se agrega otra desigualdad que se presenta en el propio sector privado. Las ISAPRES no atienden a las personas más débiles porque no les resulta rentable. Entonces, las ISAPRES, por ser precisamente un negocio, no aceptan a ancianos, embarazadas y aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas. Las capas medias viven entonces en la incertidumbre permanente por los elevados costos de la salud privada así como por las restricciones que imponen a sus cotizantes.

Si bien desde 1990 a la fecha ha habido un aumento de los recursos financieros a favor de la salud pública, éstos siguen siendo insuficientes para satisfacer las crecientes demandas de la población. En efecto, no se han logrado alcanzar los equivalentes de gasto en salud que existían en Chile hasta 1973 ni tampoco éste es de nivel similar al de otros países con estándares respetables.

Hay que reconocer que el énfasis impulsado en los últimos años a favor de la salud primaria constituye un avance positivo tanto para el mejoramiento de los estándares de salud como para el acercamiento de la medicina a los sectores más pobres de la población. No obstante, en los centros de atención de la salud primaria se observan serias limitaciones en la dotación de médicos, sobre todo especialistas, y en sus niveles salariales. A ello se agregan dos fenóme-

nos preocupantes. La falta de adecuación de las escuelas de medicina para la formación curricular en el trabajo de atención primaria y las diferencias inmensas de recursos entre municipios pobres y ricos, instancias de las que dependen en nuestro país los servicios primarios de salud como también las escuelas públicas.

Por otra parte, en Chile la insuficiencia hospitalaria es manifiesta. El número de hospitales es bajo, buena parte de los existentes son de antigua data y se encuentran en condiciones deplorables.

Las atenciones de especialidad con el Plan Auge, impulsado durante el gobierno del Presidente Lagos, que ofrece garantías y derechos exigibles para los enfermos, apuntan en una dirección positiva. Sin embargo, la implantación del Auge ha develado las deficiencias generales que hoy tiene el sistema público de salud, tensando cotidianamente la infraestructura existente y al personal de salud a la hora de cumplir las garantías en cuestión. Y cuando no se puede cumplir en los hospitales públicos, el Estado debe trasladar a los enfermos a clínicas privadas a muy elevados costos.

En suma, a pesar de la prioridad relativa que se ha otorgado al sector salud, hay debilidades en la atención primaria, existe déficit de camas críticas para hospitalización prolongada, con escasez de especialistas en el sistema público y su inequitativa distribución a nivel nacional. Las voluminosas listas de espera en patologías no comprendidas en el Auge y los plazos vencidos en aquellas consideradas en dicho

régimen, así como la deteriorada infraestructura de algunos hospitales, exigen cambios urgentes en materia sanitaria.

Mientras tanto, el sector privado, con las ISAPRES, amplía sus negocios y multiplica las ganancias. Hermosas clínicas y tecnologías sofisticadas se unen al negocio de las ISAPRES y además se vinculan a nuevas escuelas de medicina de las universidades privadas. Pero su cara más oscura son las barreras de entrada que colocan las ISAPRES a clientes con enfermedades preexistentes así como la elevación de las cotizaciones según pasan los años.

Como consecuencia de los altos costos para los ancianos y las barreras para enfermedades preexistentes, estos pacientes terminan en el sistema público. Al mismo tiempo, ante cualquier emergencia, muchos pacientes se acercan directamente a los servicios públicos. Todo ello recarga los costos financieros y de gestión de las instituciones públicas de salud.

Finalmente, como es de suyo evidente para todos los enfermos y sus familias, la venta de remedios se ha convertido en instrumento escandaloso de robo a los enfermos. Tres farmacias²⁴ se coordinan para estafar al público mediante la colusión de precios de los fármacos y las instituciones reguladoras han permanecido impasibles por largas décadas.

²⁴ Se trata de Cruz Verde, Salco Brand y Farmacias Ahumadas, las que han sido querelladas por colusión de precios. Recientemente los ejecutivos de esas tres farmacias fueron encausados en el Poder Judicial por el delito de colusión de precios.

Las AFP, promesa incumplida

El sistema previsional privado, de capitalización individual, cumplió 30 años de su puesta en marcha, y se ha hecho evidente que sólo es buen negocio para los administradores del sistema y no para los pensionados.

Como consecuencia de la crisis del 2008-2009 y también de las caídas de las bolsas en 2011-2012 los ahorrantes en las AFP han perdido sumas millonarias. Crece la preocupación sobre el manejo que se viene haciendo sobre los ahorros de los trabajadores y el cuestionamiento al hecho que los fondos previsionales se encuentren sujetos a los vaivenes del mercado.

El sistema de AFP surgió en 1981 como una alternativa casi obligada al ahora conocido «sistema antiguo» estatal, basado en un régimen solidario o colectivo de reparto. Este régimen fue gestionado entre 1924 y 1988 por cajas de previsión. De 1988 a 2010 fue administrado por el Instituto de Normalización Previsional (INP) y actualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Hoy día ha quedado en evidencia el engaño que ha significado el sistema de AFP, ya que las jubilaciones son tres o cuatro veces inferiores a las que otorgaba el estatal Instituto de Normalización Previsional (INP). En efecto, no se ha cumplido la promesa que las pensiones de los jubilados de las AFP serían el 70% de las remuneraciones de los cotizantes al momento de jubilarse.

De acuerdo con un estudio de Cenda, Resultados para sus Afiliados de las AFP y Compañías de Seguros Relacionadas con

la Previsión: 1982-2008 (Cenda, 2009), las AFP y sus compañías de seguro relacionadas han obtenido como ganancia, en forma de primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981 hasta ahora. Los dos tercios restantes, según esa fuente, han sido prestados a grupos económicos en forma de capital accionario y créditos.

Consecuentemente, la inviabilidad del sistema de AFP ha obligado al Estado a financiar las pensiones de 60% de las personas de menores ingresos. Precisamente, tras la promulgación, en 2008, de la Ley N° 20.025 que reformó el sistema de pensiones, el Estado asumió que el sistema de AFP no era capaz de entregar pensiones a la mayoría de los cotizantes. Fue entonces que se hizo cargo de las pensiones de la población con menores ingresos.

Por otra parte, las decisiones de inversión de los ejecutivos de las AFP han sido un desastre, y no sólo a consecuencia de la crisis internacional. En efecto, la multitienda La Polar obtuvo del banco BBVA un préstamo por 53 mil millones de pesos (105 millones de dólares). La Polar no pagó la cuota de agosto de 2010, lo que alertó al banco respecto de la insolvencia de su acreedor. Sin embargo, BBVA emitió bonos de La Polar por 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). La AFP Provida, compró 26% del total de esos bonos, y lo mismo hicieron otras AFP y compañías de seguros.

Es decir que AFP Provida, la más grande de Chile, invirtió en La Polar grandes sumas de los fondos de pensiones a su

cargo, sabiendo que estaba imposibilitada para pagarle. La compra del bono fue articulada por la agencia de valores del propio banco BBVA y emitida con la finalidad de pagar el préstamo adeudado al banco propietario de la AFP.

Cuando La Polar ingresa en crisis terminal, que afectó a sus accionistas y a un millón de tenedores de tarjetas de crédito, se pudo conocer que el sistema de AFP poseía 600 millones de dólares en acciones de esa multitienda, lo que equivalía a 24% de su valor. Esto les supuso pérdidas por cerca de 300 millones de dólares. Sin embargo, estas pérdidas no afectan a los propietarios de las AFP, sino únicamente a los trabajadores que cotizan en este sistema.

En suma, las Administradoras de fondos previsionales (AFP) nacieron con el discurso que responderían a la supuesta crisis del sistema público y que la capitalización individual, en contraposición al régimen solidario, daría plena satisfacción a los jubilados de nuestro país. No ha sido así, lamentablemente.

Al igual que la educación y la salud el sistema de AFP se ha convertido en un negocio inmensamente lucrativo para sus administradores. En la práctica, se trata de un sistema abusivo que ha expropiado las contribuciones de los trabajadores en beneficio de los grupos financieros.

Como anotábamos arriba las AFP se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados por sus afiliados desde 1981 (Riesco, 2011). El resto lo utilizan para comprar acciones y otorgar préstamos a otras empresas.

Por otra parte, el régimen de AFP no otorga pensiones dignas, excepto a los altos ejecutivos de empresas, los únicos que pueden aportar elevadas sumas de dinero a su capitalización individual, gracias a sus elevados sueldos y ganancias empresariales. Así las cosas, la Presidenta Bachelet impulsó una reforma parcial mediante la cual el Estado se tuvo que hacer cargo de otorgar beneficios solidarios al 60 por ciento de los afiliados con pensiones inferiores a los 200,000 pesos mensuales. En consecuencia, los chilenos ya no cuentan con un verdadero sistema de pensiones.

Todo indica que este régimen no resiste más por su incapacidad para dar satisfacción a los pensionados. Y, parece inevitable, que se deberá retornar a un sistema de reparto, el que probó su eficiencia y durante gran parte del siglo XX en el país. Por lo demás en Argentina se terminó con el régimen de capitalización individual y se retornó al sistema de reparto, con pleno éxito. Según Riesco, ha sucedido lo mismo, y con resultados positivos en Bolivia, Hungría y Polonia.

En suma, la grave situación de los pensionados tiene su origen en un sistema previsional injusto y que obedece a una lógica empresarial antes que social, cuyo fundamento es la capitalización individual del trabajador, donde el empresario no efectúa aporte complementario alguno. Ya ha alcanzado un importante consenso la idea de que el actual sistema previsional, además de injusto, puede llegar a colapsar de no adoptarse algunas medidas urgentes de corrección.

Desigualdad regional

Los espacios territoriales, regiones, ciudades y aglomeraciones urbanas, es donde en definitiva se plasma físicamente el resultado del conjunto de políticas económicas y sociales que organizan nuestra sociedad. Y el neoliberalismo ha sido cruelmente deficitario en el ordenamiento de nuestro territorio.

El mercado, sin regulación, ha agudizado la concentración en territorios que parten con una ventaja inicial; o sea, los lugares con mayores recursos son los que concentran el poderío económico y lo reproducen. Ello resulta, en términos territoriales, que las grandes ciudades, como es el caso de Santiago, concentran la mayor parte de la población y del PIB del país.

Así las cosas, la calidad de vida de Santiago se ha visto seriamente afectada. La contaminación del aire es un problema cada vez más grave, la provisión de servicios básicos de infraestructura se ha encarecido, la congestión hace que el acceso a los servicios y participación en la economía urbana se vuelva más difícil. Adicionalmente, la expansión urbana de Santiago se ha hecho en detrimento del valle más fértil del país, mientras existen varios territorios sin ocupar y con menor valor ambiental.

A fin de cuentas, el patrón de desarrollo concentrador produce ciudades y territorios sin adecuados servicios, ni oportunidades de empleo e impactos negativos en la salud de la población, principalmente niños y ancianos.

En las ciudades se verifica el mismo

fenómeno descrito para los espacios territoriales.

En nuestras ciudades, el mercado de la vivienda y el valor de la tierra han determinado un patrón ineficiente y segregado en el uso de los suelos urbanos. Las leyes del mercado atraen siempre a la misma categoría social para poblar los mismos barrios. Al final, la segregación social barrial termina exacerbando la división de las personas en mundos apartes en una misma ciudad: los hijos de los barrios altos nunca verán lo que es un almacén en La Pintana, y los niños de las familias humildes no se pueden imaginar lo que es una mansión de La Dehesa.

La irracionalidad de esta estructura urbana en lo que se refiere al uso del espacio, servicios e infraestructura es muy costosa. La inmoralidad de la segregación social que perpetúa este tipo de urbanismo es más grave aún.

Finalmente, y ello es manifiesto en el Centro de Santiago, las leyes del mercado han empujado la irracionalidad al extremo de propiciar la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad a favor de edificios residenciales sin alma y sin carácter, destruyendo barrios enteros que renacen vacíos de valor.

*Los consumidores: la Polar no es una anomalía, es el sistema*²⁵

Junto a las desigualdades manifiestas existentes en el país, los abusos han crecido en todos los ámbitos, aunque muy especial-

²⁵ Basado en Pizarro (2012).

mente en el sector financiero. En este campo el negocio se ha extendido desde los bancos hacia las multitiendas, supermercados e incluso farmacias. En la práctica, el giro principal de estas dos actividades no son precisamente las ventas de productos sino muy fundamentalmente el negocio del crédito a los consumidores. Con tal propósito se presiona a los clientes para que utilicen tarjetas de crédito, con elevadísimas tasas de interés.

El paradigma de este sistema ha sido la multitienda La Polar, la que ha escandalizado al país por las graves anomalías que han afectado a sus clientes y también a sus accionistas. En efecto, la Polar ha planificado una estafa que revela la codicia de los capitalistas chilenos y prueba que las instituciones funcionan, pero sólo para la minoría expoliadora. Sus ejecutivos maquillaron la contabilidad de la empresa, en el marco de una grave crisis de sus finanzas, con el propósito de mostrar cifras azules en los balances y así promover la compra de acciones del público, mientras ellos las liquidaban a buenos precios en el mercado. Ha sido un escándalo nacional, que ha afectado a accionistas, pensionados de las AFP y cientos de miles de clientes.

Los ejecutivos de La Polar han tenido un comportamiento delincuenciales. Pero no son los únicos responsables. La clase política es la principal responsable ya que en vez de desarrollar iniciativas y legislar para favorecer con crédito bancario razonable a las familias bajos ingresos, convirtió a las multitiendas en cuasi bancos, permitiéndoles fijar tasas de interés usureras

con cero regulación. Ello tuvo dos impactos sociales graves. Por una parte, los costos del crédito del retail ha encarecido la vida de los pobres; por otra parte, ese sistema de crédito ha debilitado la posición competitiva del comercio minorista, aumentando su mortandad.

El auge del retail en Chile se encuentra estrechamente vinculado al negocio financiero y nada tiene que ver con la venta de productos. Comenzó como herramienta para potenciar ventas, convirtiéndose posteriormente en un negocio autónomo. Las ganancias financieras mediante las tarjetas de crédito son el componente más importante de los ingresos totales de las compañías de retail, y operan sobre las familias de más bajos ingresos.

En el caso de la Polar el negocio financiero se convirtió en una perversión, ya que no sólo expolió con tasas de interés usureras, sino que utilizó a sus clientes morosos como instrumentos para transformar una compañía virtualmente en quiebra en una empresa próspera. Y estamos hablando de un millón de clientes. En efecto, La Polar realizó repactaciones automáticas unilaterales de las deudas con sus clientes, incluyendo sobre-intereses, mora, gastos de cobranzas, etc. Así, la contabilidad transformaba cifras rojas en azules, se posponía la deuda anterior mediante la repactación, y se mostraba un crédito nuevo. Es la «contabilidad creativa», fraude inventado por los ejecutivos de Enron y Worldcom, en los EE.UU., para inflar ganancias, engañar al público y accionistas.

El directorio de la Polar dice que no

advirtió las anomalías existentes, pero nadie le cree. Su responsabilidad es ineludible, como lo es también la de Price Waterhouse Coopers (PWC), auditora externa de la multitienda, que visó de forma irresponsable todos los estados financieros, sin observar problema alguno.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), aunque no fiscaliza en terreno a los emisores de tarjetas no bancarias, le corresponde revisar los informes preparados por la auditora externa, vale decir PWC. La SBIF sabía perfectamente el elevado endeudamiento de los clientes de la Polar, pues aparece destacado en su propia página web y, por tanto, actuó con escasa rigurosidad al dar visto bueno a lo obrado por la auditora externa.

La Polar pudiera no ser la única empresa que presenta anomalías de carácter fraudulento, ya que la perversa lógica del sistema de las tarjetas de crédito se encuentra presente en todo el retail e incluso en supermercados y farmacias. Al mismo tiempo, sin mecanismos de control adecuados, el respeto a los consumidores descansa en la «responsabilidad social empresarial», la que en el sistema capitalista chileno deja mucho que desear. Por tanto, una investigación rigurosa bien podría destapar casos similares al de La Polar en otras empresas del retail.

El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, decía «hay que dejar a las instituciones funcionar». Se equivocaba. Porque el conjunto de la institucionalidad anda mal y hay que cambiarla. Hay que modificar un

sistema financiero que ha promovido las tarjetas de crédito no bancarias y que al mismo tiempo no tiene capacidad de controlarlas, sobre todos cuando las cifras de la SBIF revelan que a fines de 2010 sólo el 23% de las tarjetas eran bancarias y el 77% restante correspondían al retail. Y éstas están destinadas a las personas más pobres del país, precisamente aquellas que no pueden acceder a créditos de consumo en la banca.

Las tasas de interés por esas tarjetas son cuatro veces más de las que cobran los bancos. El volumen del negocio y su impacto social debió haber interesado mucho más a gobiernos y parlamentarios. Las sanciones para quienes cometen delitos financieros gravísimos también debieran haber concentrado su interés. Lamentablemente no ha sido así y ahora se viven las consecuencias. Los directivos de La Polar deben responder ante la ley y la clase política ante la sociedad. Los primeros por fraude; los segundos por negligencia.

*El sistema impositivo, paraíso para los ricos*²⁶
La respuesta a las demandas ciudadanas exige un nuevo régimen impositivo. Educación pública y gratuita, un sistema de salud decente, jubilaciones que permitan enfrentar la vejez con dignidad, reducir los desequilibrios entre Santiago y las regiones, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, fortalecer la labor regulatoria y supervisora del Estado, son todas

²⁶ Partes de este apartado se encuentran en Pizarro (2012a).

tareas de envergadura que exigen mayores recursos fiscales.

Como consecuencia precisamente de las movilizaciones ciudadanas, el gobierno de Piñera propone al parlamento una iniciativa de reforma tributaria. Ha provocado, sin embargo, una fuerte polémica. Su propósito es captar mayores recursos para la educación: pero, no se propone una reforma radical del sistema educacional, sino sólo aumentar el mecanismo de becas y créditos, lo que es categóricamente rechazado por la dirigencia estudiantil. Persistir en el sistema de bonos, el asistencialismo, la focalización, ya no es convincente.

La reforma propuesta —ajuste la llaman algunos— apunta en lo sustancial a elevar el impuesto a las empresas desde el 17% al 20%²⁷, lo que significará eventualmente mayores recursos para el fisco entre US\$ 700 y US\$ 1.000 millones. Hay otras medidas, pero más bien irrelevantes: disminución entre 10% y 15% del global complementario, cuya incidencia es cuantitativamente poco significativa y favorece a los sectores de más altos ingresos; descuento de impuestos por pagos de educación, lo que favorece también a los altos ingresos, vale decir los que pagan impuestos; y, la disminución desde 0,6% al 0,2% del impuesto de timbres y estampillas a favor de las PYMES.

El sistema impositivo chileno tiene una triple característica, que lo convierte en un

paraíso para el mundo empresarial. En primer lugar, la carga tributaria alcanza a un 20% del PIB mientras en los países de la OCDE es del 35% en promedio; adicionalmente, hay que decir que en momentos que los países de la OCDE tenían el actual nivel de ingreso de Chile su carga impositiva era de 33,5%. En segundo lugar, la tasa impositiva pagada por las empresas es de 17% mientras en Alemania y los EE.UU. es de un 40% y en Finlandia un 28%, con la diferencia que en el caso chileno esos impuestos se convierten en un crédito a la hora del cálculo del impuesto a las personas. Por tanto ese 17% es virtual. En tercer lugar, la mayor parte de la recaudación impositiva, entre un 45% y un 50% (dependiendo de los precios del cobre) corresponde al pago del impuesto al valor agregado (IVA), lo que significa que proporcionalmente los sectores de bajos ingresos entregan más recursos al Fisco

A esas tres características se agregan otras tres complementarias, que difícilmente se encuentran presentes en otros países. En Chile, los dueños de las empresas utilizan como crédito para el descuento de sus impuestos personales todos los gastos en que han incurrido en las actividades de sus empresas; por tanto las empresas no pagan impuestos en la práctica. En segundo lugar, las empresas productoras de recursos naturales no pagan royalties²⁸, favoreciendo sus utilidades gracias a la renta que captan de esos recursos. En tercer lugar, el

²⁷ En realidad el cambio de tasa consolida el aumento que ya se había realizado para acopiar recursos por la reconstrucción por el terremoto del 27-02-10, la que de transitoria se convertirá en permanente.

²⁸ En el gobierno de Lagos se aprobó un impuesto específico, el que se amplió con el gobierno Piñera.

sistema impositivo contempla variados beneficios, como exenciones, franquicias y diferimientos, lo que ha facilitado una elevada elusión tributaria.

El elevado crecimiento de la economía y del ingreso per-cápita, que a la fecha es de US\$ 16.000, muestra un país con una pésima distribución del ingreso y con un Estado muy débil, incapaz de entregar a sus habitantes una salud y educación decentes y un sistema de previsión que permita a los jubilados vivir con dignidad. Al mismo tiempo, las regiones lejanas, en el norte y sur del país, aumentan sus protestas porque no se benefician con los frutos del crecimiento y no reciben compensaciones por el encarecimiento de la vida en esas zonas extremas. Finalmente, consumidores, trabajadores, pequeños empresarios y dueñas de casa reclaman cotidianamente porque el Estado no tiene el vigor ni el personal suficiente para regular y sancionar apropiadamente las arbitrariedades que sufren de parte de las multitiendas, supermercados, banca y servicios de utilidad pública.

En definitiva, Chile no capta suficientes recursos impositivos lo que le impide contar con un Estado que responda a las necesidades sociales y regulatorias que exige su actual nivel de ingreso per-cápita. Adicionalmente el sistema impositivo es inequitativo, no protege los recursos naturales y favorece la concentración económica en los sectores más ricos de la población.

En consecuencia, una verdadera reforma tributaria, que no constituya un simple maquillaje para domesticar las protestas

estudiantiles y ciudadanas debería apuntar a distintos ámbitos, en particular aumentar recursos, evitar elusión y mejorar la equidad.

En primer lugar, parece fundamental reducir el IVA, que actualmente alcanza el 19% y aumentar el impuesto a los más ricos o directamente a las empresas. El ingeniero Michael Jorrat, ex Jefe de Estudios del Sistema de Impuesto Internos, sostiene que se debería bajar el IVA al 6% porque la mayor parte de los chilenos dedican su ingreso al consumo, sugiriendo aumentar el impuesto a los más acomodados (Jorrat, 2012). Esto sería equitativo y representaría un desahogo al bolsillo del 90% de las familias chilenas. Habría que agregar que parece altamente conveniente diferenciar el IVA considerando que las familias modestas destinan una alta proporción de sus ingresos a productos de consumo básico. No sería mala idea entonces un IVA para el consumo básico y otro diferente para los bienes suntuarios.

En segundo lugar, habría que apuntar a la eliminación de los beneficios tributarios a las empresas, lo que favorece una elevada elusión y genera una manifiesta injusticia. En efecto, el crédito a la construcción de viviendas, la exención al arrendamiento de viviendas DFL2 (hasta 140 m²), el fondo de utilidades tributarias (FUT), exenciones impositivas a la salud y educación privadas, entre otras, representan una cifra cercana al 4% del PIB; vale decir, US\$ 10.000 millones. Si sólo se eliminaran estos beneficios, sin aumentar incluso los impues-

tos, se tendrían recursos para dos y media reformas educacionales, públicas y gratuitas, como han solicitado los estudiantes.

Sobre los injustificados beneficios tributarios a las empresas, destaquemos el absurdo que significa no cobrar impuestos a las compañías de seguro (ISAPRES) y clínicas privadas, en que tanto los pagos de cotizantes como los costos en que incurren los enfermos son superiores a los de Suiza. Destaquemos también la arbitrariedad que implica que las escuelas y universidades particulares (empresas de negocios) no paguen impuestos, cuando las familias deben cancelar aranceles entre \$ 200.000 y \$ 400.000 mensuales por cada hijo.

Agreguemos especialmente a ello el inmenso beneficio que significa el denominado Fondo de utilidades tributarias (FUT) en la elusión impositiva. Este mecanismo permite que no paguen impuestos las utilidades que no se distribuyen y con ello los empresarios crean sociedades ficticias o compran empresas quebradas para eludir impuestos y en la práctica no reinvierten las utilidades no distribuidas.

El mismo especialista Jorrot calcula en aproximadamente US\$ 200 mil millones las utilidades acumuladas sobre las cuales no se han pagado impuestos. El mismo cálculo lo han hecho también los profesores López y Figueroa, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, los que añaden que el no pago de impuestos por el FUT implica entre U\$20 y US\$30 mil millones de impuestos que nunca se han entregado al Fisco (López y Figueroa,

2012). Ambos agregan que este se ha convertido en un escándalo, que preocupa a la propia OCDE.

En tercer lugar, está la injusticia que significa para la sociedad chilena que las rentas del cobre y de otros minerales, así como de la pesca, sean apropiadas gratuitamente por las empresas que explotan tales recursos. En la mayor parte de los países el derecho a acceder a esa riqueza no se incorpora a las utilidades de las empresas sino se convierte en impuestos mediante un royalty. Y la razón es simple: se trata de propiedad de todos los chilenos.

Finalmente, habrá que considerar que el 17% que pagan las empresas es extremadamente bajo en comparación a otros países y a las grandes utilidades que vienen recibiendo los grupos corporativos. Por ello no es casualidad la elevada concentración de la riqueza que existe en Chile, con familias, como Matte, Angelini, Luksic y Paulman que aparecen en la revista Forbes como las más ricas del mundo, mientras el coeficiente de Gini en Chile revela una deteriorada distribución del ingreso, sin modificaciones desde hace décadas.

Hay que destacar, como lo dicen López y Figueroa, que la distribución del ingreso mejora con un sistema impositivo que capte más recursos de los sectores de altos ingresos, que reduzca la elusión y que sea progresivo, como sucede en los países de la OCDE.

La distribución del ingreso en Chile después de impuestos es más desigual que antes de su aplicación. Ello diferencia a Chile de

los países de la OCDE, y de la mayor parte de los países de América Latina. En efecto, en la mayoría de los países de la OCDE el coeficiente de Gini mejora en un 15% después de la aplicación de impuestos. En cambio, en Chile, sucede lo contrario: el coeficiente de Gini después de impuestos es más elevado que antes de su aplicación.» (López y Figueroa 2011).

En suma, una efectiva reforma tributaria debiera servir para aumentar la captación impositiva de manera que el Estado pueda atender necesidades insoslayables que hoy día no atiende. En segundo lugar, le correspondería disminuir la carga existente sobre las personas más modestas, vale decir el 90% de la población. Y, finalmente, debiera ayudar a mejorar la distribución del ingreso en el país. Nada de eso está presente en la propuesta de Piñera. Y, una reforma impositiva es demasiado importante para ser utilizada como instrumento de respiro político frente al creciente descontento social.

4. Las instituciones políticas no funcionan... para la mayoría

Las movilizaciones sociales revelan que en la sociedad chilena ha despertado un malestar que se encontraba sumergido. Es un malestar subjetivo, desestructurado, pero que tiene insoslayables raíces objetivas (Mayol, 2011). Cómo nos dice Ernesto Laclau:

...las demandas surgen, aisladas al comienzo, en diferentes puntos del tejido social, y la

transición hacia una subjetividad popular consiste en el establecimiento de un vínculo equivalencial entre ellas. (Laclau, 2011: 113)

El núcleo central de las demandas se encuentra en el movimiento estudiantil, pero se extiende a los consumidores, medio-ambientalistas, homosexuales, usuarios del transporte público, trabajadores subcontratados y regiones (Magallanes, Aysén, Calama, Freirina).

Ahora bien, desde la protesta del movimiento secundario el 2006, durante el gobierno Bachelet, y su frustración con el gatopardismo de la LOCE convertida en LEGE, durante el gobierno Bachelet, pasando por las demandas del 2011 y las actualmente en curso, es ineludible reconocer un cambio de la realidad chilena, con el ingreso potente de los movimientos sociales y ciudadanos en la escena política. Y, como señala el mismo Laclau:

Si la situación permanece igual por un determinado tiempo habrá una acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial. (Laclau, 2011: 98)

Hoy nos encontramos con indicaciones manifiesta que el ciclo político que restauró la democracia en 1990 ha perdido legitimidad.

En efecto, la ciudadanía percibe que la distribución del ingreso en Chile es la más injusta de todos los países de América Latina. Al mismo tiempo, considera que sus

perspectivas de futuro son bajas, cayendo radicalmente la visión de progreso. Y ello, a pesar que el país está creciendo vigorosamente y el gobierno anuncia que se ingresará al mundo desarrollado hacia el año 2018.

Por otra parte, pocos piensan que la democracia ha mejorado y, en el último año, se duplicó el número de personas que consideran que los políticos actúan para su propio beneficio (Mayol, 2011).

La protesta se había manifestado soterradamente durante los gobiernos de la Concertación. Ello se expresó en que la mitad de los hombres y mujeres no ejercen sus derechos ciudadanos. Los jóvenes no se inscriben en los registros electorales, muchos ciudadanos no llegan a votar y otros sufragan nulo o blanco.

La masiva ausencia de los procesos electorales expresa el rechazo al régimen político, en particular al sistema binominal de quienes no se sienten representados por los dos bloques políticos mayoritarios. Y también revela la insatisfacción de los jóvenes, a quienes se impide participar plenamente en los partidos políticos o se les excluye de los cargos de representación pública, para asegurar a las cúpulas políticas su reproducción en el poder.

La transición nos ha entregado una democracia imperfecta, en que los anhelos populares más sentidos se han visto frustrados. Se restablecieron las libertades básicas, pero se observa una decreciente participación ciudadana.

Además, el período de transición se caracteriza por una inédita desmoviliza-

ción y apatía ciudadana, cuyo origen se encuentra en la acción sistemática que realizó la dictadura por desprestigiar la política y debilitar las organizaciones sociales.

El propio desprestigio de los políticos replantea las relaciones entre los propios resistentes. La desconfianza en las tradicionales formas de representación hace que las relaciones entre los rebeldes sean radicalmente democráticas. En efecto, como señalan Hardt y Negri:

La genealogía de las modernas resistencias, revueltas y revoluciones revelan una tendencia creciente a la organización democrática, desde las formas centralizadas de la dictadura revolucionara hasta las organizaciones en red que excluyen la autoridad en las relaciones de colaboración. Dicha genealogía revela una tendencia de las organizaciones resistentes y revolucionarias no sólo a convertirse en medios para lograr una sociedad más democrática, sino a crear relaciones democráticas dentro de su propia estructura. (Hardt, Negri, 2004: 18).

Cambio en las instituciones,

empezando por la Constitución del 80

Lagos modificó parcialmente la Constitución de Pinochet, pero no tuvo la voluntad política para movilizar al país contra aquellos que defienden el discriminatorio sistema electoral binominal. Esta es una tarea pendiente, como lo es también la eliminación de las restricciones que impone la Constitución al Estado para desplegar iniciativas económicas.

En consecuencia, no ha cambiado la

esencia de una Constitución impuesta en dictadura. Por lo demás su instalación y ulteriores cambios no tienen legitimidad ya que no fueron plebiscitados. Sigue entonces pendiente establecer una nueva Constitución que sea discutida y aprobada por toda la ciudadanía, vale decir que sea plenamente democrática y representativa. Y como bien nos señalan Salazar y Pinto:

La Constitución de 1980, al coartar la autonomía ciudadana en el plano de su acción política y en el de sus acciones directas, atenta contra el derecho inalienable del hombre a construir socialmente la realidad y a modelar colectivamente su futuro. (Salazar y Pinto, 1999: 108)

Por otra parte, existe otra forma de injusticia y desigualdad que dice relación con el alto grado de centralización del poder político, con manifiesto desmedro para las regiones del país. La democratización del poder obliga a una participación política plena de las regiones en la vida nacional y a una autonomía efectiva en los asuntos que directamente le competen. Persistir en la hegemonía de Santiago se hace insostenible, dada la larga geografía nacional y habida cuenta del peso económico, social, cultural y medioambiental de las regiones.

En consecuencia, el cambio de las instituciones que demandan los ciudadanos exigirá derogar la Constitución de 1980 y convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Fundamental, que devuelva la soberanía al pueblo de Chile.

El nuevo marco constitucional deberá estar basado en la representatividad de todos los sectores políticos, con participación de las organizaciones sociales, un nuevo equilibrio entre el Gobierno, el Parlamento, las regiones y las comunas y donde la igualdad de derechos políticos, económicos y sociales tenga rango constitucional efectivo.

Será preciso atenuar el presidencialismo, restituyendo los poderes y funciones cercenados al Parlamento por la Constitución de 1980, principalmente en materias de fiscalización del Ejecutivo e iniciativa legal. Es preciso corregir el actual desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento, para revertir el extremo poder presidencialista que caracteriza al sistema político chileno.

Finalmente, una nueva Constitución deberá revalorizar el concepto de Estado como expresión de las mayorías, consagrar los derechos y obligaciones del pueblo en el marco de una democracia plena, con un sector público que participe activamente en la economía, y que contenga y promueva los derechos humanos en su más amplia dimensión.

Esta es la única forma de terminar con la democracia tutelada, que impide el ejercicio efectivo de las mayorías en los procesos electorales y en el propio Parlamento, que niega el derecho a plebiscitos ciudadanos, que no reconoce la representación de los pueblos originarios, que cuestiona el derecho de los dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento, que cierra las puertas a una representación democrática a

las autoridades regionales, que perpetúa ad eternum a alcaldes, diputados y senadores

El papel de la sociedad civil

La crisis de legitimidad y la reconstrucción de las instituciones, y en definitiva de una nueva hegemonía, convierte en insuficiente la nueva Constitución. Exige al mismo tiempo una sociedad civil vigorosa, activa y vigilante. Ello facilitará la distribución más equitativa del poder y ayudará a terminar con los abusos y discriminaciones.

El Estado, con una nueva Constitución deberá, debe otorgar poder económico y reconocimiento político a las organizaciones sociales para estimular el fortalecimiento de la sociedad civil. Sólo así la participación ciudadana se podría convertir en instrumento de influencia y decisión de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

La recomposición democrática exige terminar con el monopolio de los partidos políticos. No basta con la representación indirecta, sino se requiere formas de participación directa para que los ciudadanos puedan ejercer la democracia de forma efectiva. Ello por lo demás se hace crecientemente posible gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Como bien lo señala el documento de Océanos Azules:

Se trata de reequilibrar los espacios y poderes de los poderes públicos, de los partidos, de los ciudadanos y de los gobernantes. Las caricaturas interesadas abundan. Se ejemplifica mañosamente con algunos sistemas

políticos plebiscitarios de América Latina. Se desempolva el viejo argumento del miedo a lo desconocido. Los más conservadores una vez más sostienen que el pueblo no está preparado para tener espacios directos de poder. En fin, no cabe duda que el sistema oligárquico de decisiones se siente amenazado. (Océanos Azules, 2012).

Precisamente la organización y accionar de la ciudadanía es la mejor garantía para controlar a la institucionalidad y, en especial, al parlamento. Esa falta de participación, que ahora se despliega con fuerza, es la que permitió que los parlamentarios en los últimos veinte años se reelijan sucesivamente, sin el menor pudor, y que los partidos políticos se hayan convertido en maquinarias oligárquicas, alejadas de la sociedad y cooptadas por el poder económico.

El poder de decisión debe volver en buena parte a la base de la pirámide. Para ello, la desconcentración y la descentralización de la toma de decisiones y facultades es impostergable. También es necesario estimular una vigorosa red de instituciones ciudadanas y organizaciones sociales. Pero hay que sintonizar con lo que la «calle» entiende por participar. Debemos visualizar y dar espacio a formas alternativas y transversales como ONG, grupos funcionales y o territoriales (ciclistas, defensores de los animales, clubes deportivos, grupos culturales y ambientalistas) que hace tiempo existen y están fuera de la estructura clásicas de participación. (Océanos Azules, 2012).

El problema central a lo largo de la historia de Chile, y no sólo a partir de la dictadura civil-militar, es que la sociedad civil ha tenido una participación marginal en la construcción del Estado. Hoy día las organizaciones sociales y ciudadanas se encuentran reivindicando un rol protagónico en la reconstrucción de las instituciones, lo que incluye la misma Constitución. Tarea por cierto difícil, como destacan Salazar y Pinto,

La historia política de Chile perfila un arquetipo de construcción estatal, a saber: la transformación de la diversidad civil en unidad política se ha logrado sustituyendo el diálogo ciudadano por un 'consenso operacional', que ha consistido en la imposición de una determinada forma estatal (unilateral) con ayuda de las Fuerzas Armadas. La 'ilegítima' tarea de alcanzar la homogeneización política de la sociedad a partir de un proyecto unilateral se ha resuelto con el uso de la fuerza. (Salazar y Pinto, 1999: 20)

En defensa de la decencia

Existe otro asunto determinante para la democratización de la política en el país: el vínculo entre la política y los negocios. En efecto, la utilización de recursos públicos para beneficio privado o para financiar actividades políticas se ha instalado en el país y es parte de una saga que ha afectado a connotadas figuras públicas con el MOPGATE, Ferrocarriles, Chile Deportes, INVERLINK, los Programas de Generación de Empleo, así como en los municipios y con las subvenciones percibidas por uni-

versidades y por escuelas privadas.

Los tiempos que corren han puesto de moda cierto tipo de capitalismo que ha debilitado a la democracia, otorgando poderes fácticos a los grupos económicos nacionales y transnacionales. Éstos participan en las campañas políticas entregando financiamiento a candidatos que posteriormente se allanan a sus intereses.

La corrupción está instalada y recorre por igual el sector privado y el público. Después de las oscuras privatizaciones de Pinochet y sus cuentas secretas, que permitieron el enriquecimiento ilícito de su familia y de varios personeros ligados al entorno del dictador, nos hemos encontrado en democracia con figuras políticas concertacionistas que transitan entre la vida política y los negocios, desde elevados niveles de dirección pública a directorios de grandes empresas o dedicados a un intenso trabajo de lobistas. Estas son razones poderosas para acabar con el secreto bancario y la privacidad de las declaraciones tributarias.

La corrupción y el lobismo se han visto facilitadas por la existencia de un sistema manejado por una minoría económica y política que administra el poder sin transparencia, sin adecuados mecanismos para controlarla. Por ello insistimos que el poder debe distribuirse, democratizarse, para frenar la reproducción sin límites de la minoría e impedir sus abusos y tropelías.

Parece que la renovación ideológica y política de los partidos de la Concertación, muy especialmente del socialismo, bajo la forma PS y PPD, se ha extendido a límites insospechados. Sirvió, en su momento, para

refrescar el pensamiento y también ayudó a materializar el acuerdo nacional que permitió desestabilizar a la dictadura. Pero, con el transcurso de los años, esa renovación ha sido utilizada para justificar el tránsito abrupto de los políticos desde el mundo público a los negocios privados. En efecto, los renovados argumentan que el mercado y la globalización son realidades insoslayables y que no tienen fronteras ideológicas. De allí concluyen que nada debiera impedir ser ministro hoy día y mañana ejecutivo de una AFP para luego volver al «servicio público» porque, de acuerdo con Discepolo, «igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida»²⁹.

No se debiera olvidar que cuando los empresarios contratan a políticos profesionales y ex funcionarios de gobiernos, lo que están comprando son los contactos y la influencia que tienen en las instituciones públicas. En momentos que la pasión por el dinero se infiltra por todas partes y corrompe a los espíritus frágiles y ambiciosos, la ética se encuentra a mal traer. Por ello resulta urgente redefinir la actual ley

²⁹ Caso paradigmático de esta renovación ha sido Jaime Estévez. Luego de finalizar su periodo como diputado del PS y haber sido derrotado en sus pretensiones senatoriales por Santiago-Oriente en 1997, fue reclutado para el directorio de la AFP Provida. Gracias al gobierno de Lagos, saltó al sector público nuevamente como Presidente del Banco del Estado. A fines del año 2000, decidió otorgar un préstamo de 130 millones de dólares al Grupo Luksic. Ello le permitió al Grupo controlar la propiedad del Banco Chile, lo que sirvió para fusionarlo con el Banco Edwards, también de su propiedad. Este inusitado

de incompatibilidades para las ex autoridades públicas, ya que hasta ahora se ha probado inútil. Si no se realiza un esfuerzo serio por terminar con los vasos comunicantes entre lo público y los negocios privados la puerta giratoria aumentará su velocidad, se acentuará la fragilidad del sistema político y la influencia de los poderes fácticos se acrecentará aún más.

El neoliberalismo ha cumplido con su misión de desprestigiar al Estado. En primer lugar, lo redujo mediante el expediente de las privatizaciones y limitando su rol regulador. Con ello se ha pretendido realzar el papel del ámbito privado como de mayor eficiencia que el sector público. Pero, además, durante los últimos veinte años, los hechos de utilización de recursos públicos para campañas políticas, así como el vínculo entre los grupos económicos y los políticos, han colocado a las instituciones estatales en una posición de fragilidad ética. Revertir esta situación en parte de la lucha social y política en que se ha comprometido la ciudadanía por modificar el modelo imperante en el país.

5. Conclusiones

La clase política chilena ha dejado de representar a la ciudadanía. No responde a sus demandas. En educación es manifiesto,

préstamo provocó una gran discusión nacional, con preguntas acuciantes: ¿Tenía racionalidad económica que el Banco del Estado prestara dinero a su propia competencia, favoreciendo además la concentración bancaria? ¿Tenía fundamento ético que el Banco del Estado utilizara los depósitos del sector público para apoyar al grupo económico más importante existente en Chile? Hoy día Estévez es miembro del directorio del Banco Chile.

pero también lo es en salud, en previsión, en asuntos medioambientales, en reivindicaciones regionales, en las exigencias de un transporte público decente. Las desigualdades prevalecen por sobre los intereses universales. Y los abusos se generalizan. Mientras la sociedad avanza en sus protestas, la clase política se repliega en su propio campo, ajena a las demandas populares. Su interés se reduce a mantenerse en el poder a cualquier costo.

El rechazo al gobierno, oposición y parlamento que evidencian las encuestas de opinión pública nunca se había visto en nuestro país. Es inédito. En su desesperación el gobierno despliega esfuerzos por eludir las demandas sociales, colocando en la palestra pública a la ex Presidenta Bachelet como responsable de las ineptitudes que ocurrieron durante el terremoto-tsunami, que resultaron en la muerte de centenares de chilenos.

Por su parte, la Concertación, también descalificada por la opinión pública, cierra filas para defenderla ciegamente, no aceptando crítica alguna, habida cuenta que aparece como su única alternativa para recuperar el gobierno en el 2014. Curiosamente a Michelle Bachelet, más que las políticas que impulsó la protegen los afectados ciudadanos. Y aquí radica la línea de defensa de la Concertación.

Las crecientes protestas ciudadanas que sufre el gobierno de Piñera no tienen un carácter puramente contingente. No constituyen sólo un ataque a su forma de gobernar. El cuestionamiento desafía, en realidad, el orden existente. Es la insatisfacción

con un modelo económico caracterizado por las desigualdades y abusos; y es, al mismo tiempo, el descontento con un régimen político que restringe la participación de las mayorías. El sistema en Chile, desde mi punto de vista, parece haber ingresado en un periodo de crisis orgánica y, por tanto, como nos señala Laclau:

...las fuerzas que lo desafían deben hacer algo más que comprometerse en la situación ambigua de subvertir el sistema y, al mismo tiempo, ser integradas a él: deben reconstruir la nación en torno a un nuevo núcleo populista (Laclau, 2011: 222) (digamos núcleo ciudadano o popular para quienes se asustan con la palabra populista, RP)

Pocos días antes del terremoto del 27 de febrero de 2010, el Ministro de Hacienda de la Presidente Bachelet, Andrés Velasco, hoy precandidato presidencial, había anunciado la incorporación de Chile al Club de los países ricos, la OCDE. Sin embargo, los dramáticos días posteriores, revelaron la ironía que significaba esa incorporación. Allí quedó de manifiesto la fragilidad de nuestras instituciones, la debilidad de un Estado minimizado por el neoliberalismo y las ineficiencias de un régimen político que ha anulado la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Con el terremoto, los éxitos macroeconómicos, la potencia exportadora, el consumismo en los malls y los realities de la televisión abrieron paso a la muerte, la destrucción de carreteras, viviendas, escuelas y hospitales. Y el jaguar se convirtió

en gato. Gobierno, fuerzas armadas, la clase política y el sector privado se revelaron completamente inútiles en la hora de la verdad. Vale decir cuando se requería proteger a los ciudadanos, alimentar y entregar un techo a los que lo habían perdido todo.

Cuando Ricardo Lagos era Presidente, en su afán de aparecer republicano, nos repetía una y otra vez «Hay que dejar que las instituciones funcionen». No se interesó en cambiarlas porque no se atrevió a desafiar a los poderosos o quizás simplemente las aceptaba. Su error quedó de manifiesto en el terremoto. Las instituciones fracasaron rotundamente. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) no fue capaz de anunciar el tsunami. El 10% de las ventas del cobre había servido para comprar fragatas de guerra, en vez de instalar sistemas modernos de detección. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) tenía teléfonos satelitales guardados en bodega y no contaba con alimentos, techo y abrigo suficientes para los damnificados.

Por otra parte, el derrumbe de la telefonía fija, móvil y el mismísimo Internet desmintieron el mito que los servicios públicos privados eran más eficientes que a cargo del Estado. Las inmobiliarias dejaron a la gente de sectores populares y medios en la más absoluta indefensión, viviendo en la calle y frente a sus edificios derrumbados o con daño estructural. Los partidos políticos brillaron por su ausencia, desligados desde hace tiempo de las organizaciones sociales.

Más allá de la sorprendente perplejidad e incapacidad que mostraron las autoridades del gobierno Bachelet a la hora del sismo, quedó en evidencia un Estado con instituciones ineficientes, que no protegen a los más débiles, y un sistema económico que no regula adecuadamente al sector privado para defender a los débiles. En suma, son las instituciones las que no funcionan, y no sólo en el ámbito de la planificación y protección indispensables frente a una catástrofe, sino en los más variados aspectos de la sociedad chilena.

La polémica que se reproduce a dos años de la dolorosa catástrofe constituye una muestra del vacío existente entre la clase política y la ciudadanía. Gobierno y oposición, la derecha y la Concertación, intentan utilizar la tragedia en su propio beneficio. Protegiendo su propio campo, defendiendo sus propios intereses. Unos, por la incapacidad que tuvo el gobierno Bachelet al no anunciar el tsunami; los otros, deslindando sus responsabilidades y atribuyéndoselas exclusivamente a las instituciones técnicas correspondientes, vale decir ONEMI y SHOA.

La sociedad chilena se da cuenta que en esta polémica los políticos están haciendo un juego propio para recuperar posiciones que han perdido por su incapacidad para transformar el país. Esta disputa es ajena a la sociedad civil. Las demandas que recorren el territorio, y que encuentran su núcleo central en el movimiento estudiantil, exigen algo muy distinto, que la clase política no puede resolver: modificar el modelo económico y el orden político. El sistema ha entra-

do en un periodo de crisis orgánica y sólo las fuerzas sociales que lo desafían podrán re-
construir las instituciones. La ciudadanía tiene la palabra.

BIBLIOGRAFÍA

- Boeninger, Edgardo (1997) *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*, Ed. Andrés Bello, Santiago.
- Chang, Ha-Joon (2010) «Entrevista» en *Página 12*, 20 noviembre.
- CIEPLAN, (1983) *Reconstrucción económica para la democracia*, ed. Aconcagua, Santiago, p. 15
- Figuroa E. y R. López, (2012) Entrevista, en CIPER, 10 de enero.
- Fitoussi, Jean Paul (2004) «La démocratie et le marché», Revista *Movimientos*. No. 2.
- Foxley, A. (1987) *Chile y su futuro*, CIEPLAN, Chile.
- Frigolett, Hernán; Alberto Mayol; Salvador Muñoz y Roberto Pizarro (2013). *Educación*.
- Fundación Sol, (2011) *Precariedad laboral y modelo productivo en Chile*, diciembre.
- Fundación Sol, (2012) *Plan nacional para salir de la trampa del salario mínimo.*, julio.
- Hardt, M. y A. Negri (2004) *Multitud*, en *Debate*, Argentina.
- Jorrat, Michael (2012) entrevista, CIPER, 5 abril.
- Laclau, Alberto (2011) *La razón populista*, FCE, reimpresión 2011.
- Larraín, Sachs y Warner, A Structural (2000) *Analysis of Chile's Long Term Growth: History, Prospects and Policy Implications*, paper, Universidad de Harvard.
- López, R. y E. Figuroa (2011) *Fiscal policy in Chile: hindering sustainable development by favoring myopic growth*, documentos de trabajo, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Santiago, Noviembre.
- López, Ramón y Eugenio Figuroa (2012) Entrevista, CIPER.
- Mayol, Alberto (2011) Ponencia en ENADE.
- Océanos Azules (2012) *Un nuevo pacto social para Chile*, Océanos Azules, mayo.
- Pizarro, Roberto (2005) *Nueva Sociedad*, Septiembre-octubre.
- Pizarro, Roberto (2005a) «Agenda Económica Propia», en Revista *Nueva Sociedad* 199, octubre-diciembre.
- Pizarro, Roberto (2012) «El perdono al retailer chileno Johnson's», en *América Economía*, 10 de junio.
- Pizarro, Roberto (2012a) «El sistema impositivo, paraíso para los ricos» en *América Economía* 12 de abril.
- Pizarro, Roberto (2010) «Pagar por trabajar», en revista *América Economía*.
- Portales, Felipe (2005) «La inexistencia de democracia en Chile», en revista *Polis* No. 10.
- Riesco, Manuel (2011) *No más lucro en las AFP*, diciembre, CENDA.
- Salazar, G. y J Pinto (1999) *Historia Contemporánea de Chile*, Tomo I, Ed. LOM, Santiago.
- Solimano, Andrés (2009) *Desarrollo Desigual y Democracia de Elites: Nuevos desafíos para el Chile del Bicentenario*. 22-06, WIDER